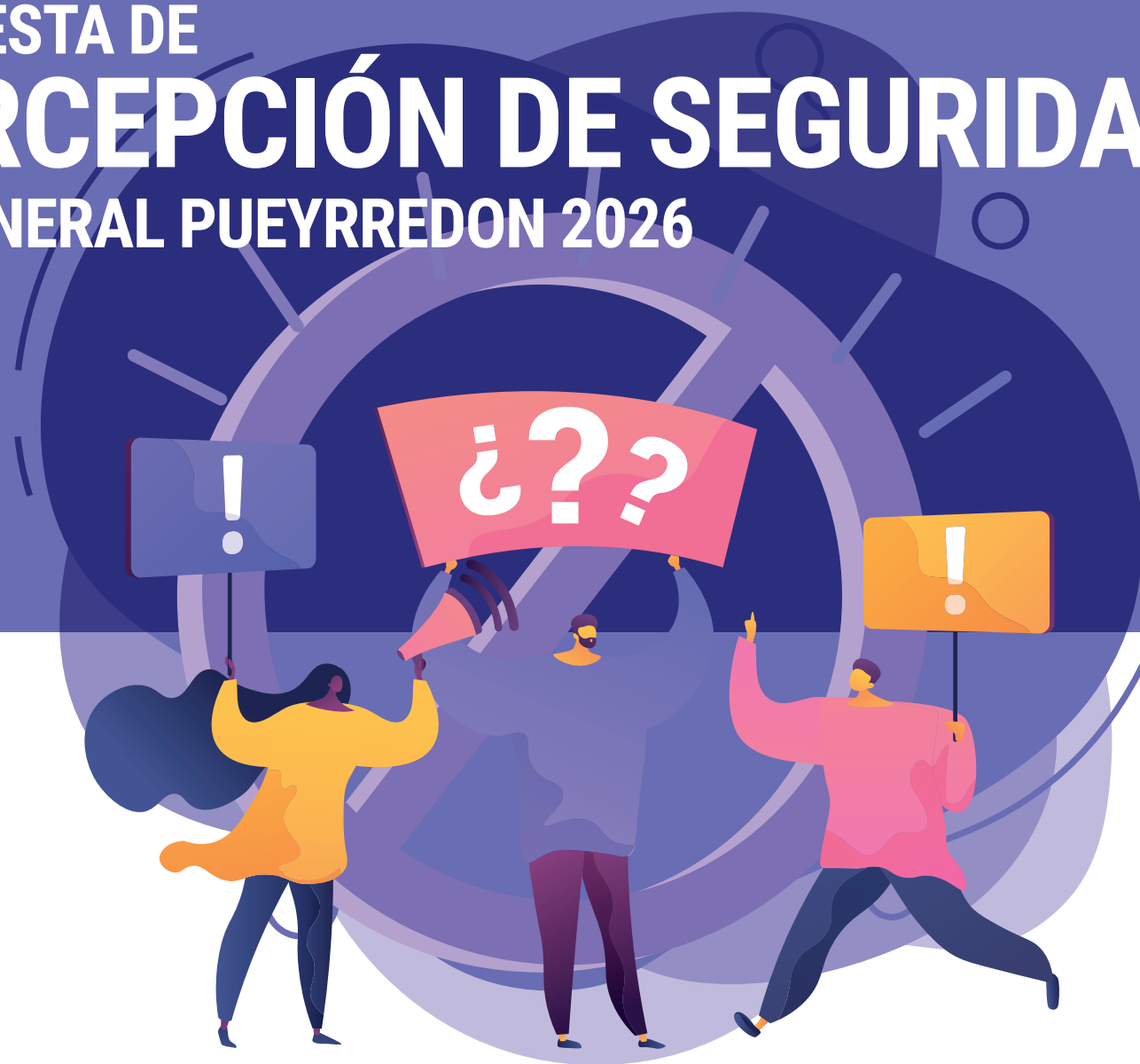


ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN GENERAL PUEYRREDON 2026



Encuesta de percepción de seguridad en General Pueyrredon 2026 / Federico Lorenc

Valcarce ... [et al.]. - 1a ed. - Mar del Plata : Mar del Plata Entre Todos, 2026.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-631-91626-2-2

1. Seguridad. I. Lorenc Valcarce, Federico

CDD 353.9

Mar del Plata Entre Todos, 2026.

ISBN 978-631-91626-2-2



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026

Autores:

Federico Lorenc Valcarce^{1,2}

Adriano Furlan²

Gonzalo Lohiol²

Lucía Rizzalli¹

Colaboración:

Equipo Técnico Mar del Plata Entre Todos Monitoreo Ciudadano – Fawaris Consultora

¹ Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	6
Principales resultados.....	6
Alcance del estudio.....	8
Información para una política de seguridad basada en evidencia.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
1. PREVALENCIA DEL DELITO	11
1.1. Extensión general del delito	11
1.2. Prevalencia de los hechos delictivos	12
1.3. Superposición y plurivictimización	14
1.4. Denuncia e ingreso al sistema institucional	17
1.5. Factores asociados a la victimización declarada.....	18
1.6. Síntesis	24
2. INSEGURIDAD SUBJETIVA: REPRESENTACIONES, EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS	26
2.1. La inseguridad como problema grave y creciente	26
2.2. Percepción de seguridad en diferentes espacios y situaciones	27
2.3. Prácticas de adaptación a la inseguridad.....	31
2.4. Medidas de protección disponibles en la vivienda.....	33
2.5. Percepción de conflictividad barrial.....	35
2.6. Factores asociados a la inseguridad subjetiva	39
2.6.1. Percepción de seguridad	39
2.6.2. Prácticas de protección personal.....	42

2.6.3. Protección residencial.....	45
2.6.4. Conflictividad barrial	47
2.7. Síntesis	48
3. CONFIANZA, DESEMPEÑO POLICIAL Y PREFERENCIAS SOBRE SOLUCIONES FRENTE A LA INSEGURIDAD	51
3.1. Confianza institucional: una legitimidad fuertemente diferenciada.....	51
3.2. Confianza y evaluación del desempeño policial.....	53
3.3. Preferencias sobre soluciones frente a la inseguridad	54
3.4. Factores asociados a la confianza, evaluación y soluciones	57
3.4.1. Instituciones.....	57
3.4.2. Soluciones.....	59
3.5. Síntesis	63
CONCLUSIONES	65
FUENTES Y REFERENCIAS DOCUMENTALES	68
ANEXO METODOLÓGICO	69
Diseño metodológico y trabajo de campo	69
Composición de la muestra y cobertura territorial.....	71
Zonificación y construcción de los indicadores territoriales	75
Caracterización sociodemográfica de las zonas	78
Características sociodemográficas y resultados territoriales de la encuesta	81
Criterios de ponderación y análisis	84
Especificidad de la medición de victimización	87
Aporte del estudio: alcances y limitaciones.....	89

RESUMEN EJECUTIVO

La Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 ofrece un diagnóstico actualizado sobre las experiencias delictivas, la percepción de inseguridad, las prácticas de autoprotección y la relación de la población con las instituciones encargadas de la seguridad. El estudio fue desarrollado conjuntamente por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-FH/UNMDP) y Mar del Plata Entre Todos (MDPET), y reunió **1.470 respuestas de personas mayores de 18 años residentes en el partido**.

Principales resultados

1. **44,4%** de las personas que participaron de este estudio declaró haber sufrido personalmente durante los doce meses anteriores al menos uno de cuatro delitos relevados en la encuesta: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones o amenazas. Los **robos y hurtos alcanzan al 35,6%** y la **violencia interpersonal –lesiones o amenazas– al 20,4%**. El robo sin violencia es el hecho individual más frecuente (27,6%), seguido por el robo con violencia (18,4%), las amenazas (17,1%) y las lesiones (7,8%). Entre quienes fueron víctimas, **46,7% indicó haber puesto en conocimiento de la policía al menos uno de los hechos**.
2. **El fenómeno delictivo aparece relativamente extendido** entre distintas condiciones sociales y residenciales, aunque las modalidades presentan perfiles diferenciados. Los robos y hurtos registran valores relativamente más altos entre varones, personas de edades intermedias y, en particular, cuentapropistas y empresarios. La violencia interpersonal, en cambio, se asocia más con edades jóvenes. Las diferencias territoriales existen, pero no configuran una única geografía del delito.
3. La **inseguridad subjetiva está todavía más generalizada**. El 96,5% considera que la inseguridad es un problema grave o muy grave y el 88,8% cree que la delincuencia aumentó respecto del año anterior. La sensación de inseguridad varía según la situación en que se ubica la persona: alcanza al 53,7% al permanecer solo o sola de noche en la vivienda, al 77,5% al caminar cerca del domicilio, al 87,1% en plazas o parques y al 88,8% en paradas de colectivo. El espacio privado aparece así como relativamente más protegido, mientras la inseguridad

aumenta en los espacios públicos y de circulación. Quienes fueron recientemente víctimas de delitos presentan más altos niveles de percepción de inseguridad.

4. La inseguridad tiene **consecuencias concretas sobre la vida cotidiana**. 68,8% evita dejar la vivienda sola, 66,6% utiliza taxis, remises o aplicaciones por razones de seguridad, 64,9% dejó de salir de noche, 63,9% dejó de circular con objetos de valor, 45,8% dejó de utilizar transporte público y 43,6% abandonó actividades al aire libre. Además, 91,6% de los casos con información completa declara al menos una medida de protección residencial, como rejas, alarmas, perros guardianes o acuerdos vecinales de vigilancia. En este último caso, la protección depende particularmente del tipo de vivienda y los recursos económicos del hogar.
5. La **relación con las instituciones** es marcadamente crítica. Las fuerzas federales son las únicas que alcanzan una mayoría de confianza, con 55,1%. La confianza desciende a 25,5% para la Patrulla Municipal, 20,4% para la Policía Bonaerense y 16,5% para el Poder Judicial. A su vez, 79,0% evalúa negativamente la capacidad de la Policía para controlar el delito en su zona de residencia. En general, la confianza y la evaluación positiva de las instituciones policiales aumentan con la edad, mientras la confianza en la justicia desciende cuando aumenta el nivel educativo del encuestado.
6. Frente a la inseguridad, **no existe una propuesta de solución predominante**. La prevención social y reducción de desigualdades reúne 28,4% de las preferencias, el endurecimiento penal 27,4%, las reformas institucionales que reduzcan la corrupción 20,0% y el fortalecimiento de la presencia y las capacidades policiales 15,7%. Los resultados muestran, por lo tanto, una ciudadanía crítica de las instituciones pero que continúa demandando intervención estatal y combina orientaciones sociales, penales, institucionales y policiales. La ocupación es el principal eje de diferenciación de las preferencias de soluciones, el haber sido víctima de un delito introduce un desplazamiento moderado hacia el polo punitivo, explicado principalmente por una menor preferencia por las soluciones social-preventivas.

Alcance del estudio

El relevamiento se realizó entre el **20 de abril y el 30 de junio de 2026** mediante un cuestionario online autoadministrado y una estrategia de difusión multicanal y territorial. La muestra es **voluntaria y no probabilística**. Presenta una composición muy próxima a la población por sexo,

pero diferencias por edad, nivel educativo y algunas áreas territoriales, que fueron abordadas mediante procedimientos de ponderación y análisis de sensibilidad.

Por esa razón, los porcentajes deben interpretarse como estimaciones descriptivas ajustadas y no como estimaciones probabilísticas con un margen de error convencional. La fortaleza del estudio reside también en el tamaño y diversidad de la base, su amplia cobertura territorial y la posibilidad de analizar conjuntamente dimensiones de la seguridad que habitualmente aparecen separadas.

Información para una política de seguridad basada en evidencia

La realización de esta encuesta después de varios años sin un relevamiento local comparable muestra la necesidad de producir información de manera periódica y acumulativa. La seguridad es un problema complejo que no puede ser comprendido a partir de una única fuente: requiere integrar estadísticas policiales y judiciales, encuestas de victimización, información territorial, evaluaciones institucionales y conocimiento sobre las experiencias concretas de la población.

Construir una política pública de seguridad basada en evidencia requiere, además, compromisos sostenidos del Estado provincial y municipal, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, las organizaciones sociales, el sector privado y las instituciones académicas, y los ciudadanos en general. El trabajo conjunto entre el INHUS y la Red Mar del Plata Entre Todos muestra una vía posible para esa tarea, y cómo la UNMDP y el CONICET pueden contribuir poniendo sus capacidades científicas y el trabajo de sus investigadores al servicio de la comunidad, aportando conocimiento para diagnosticar problemas, diseñar intervenciones, evaluar resultados y enriquecer el debate público.

INTRODUCCIÓN

La Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 fue desarrollada conjuntamente por Mar del Plata Entre Todos (MDPET) y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), instituto de doble dependencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) con sede en la Facultad de Humanidades. **El estudio ofrece información sobre la distribución social y territorial de los delitos declarados, las violencias, la inseguridad subjetiva, las prácticas de protección y las evaluaciones de las instituciones vinculadas con la seguridad pública. Su propósito es aportar evidencia para el conocimiento académico, el debate público y el diseño, seguimiento y evaluación de políticas.**

A diferencia de las estadísticas policiales y judiciales, que registran los hechos que ingresan al sistema institucional, las encuestas de victimización son un instrumento utilizado por los gobiernos y las instituciones académicas a nivel internacional para aproximarse al conocimiento de los delitos sufridos por la población, incluidos los no denunciados. En criminología, el término victimización refiere a haber sido objeto de una acción delictiva. **La información proviene del testimonio de las propias personas y depende, por lo tanto, de su percepción, memoria y capacidad para reconocer y clasificar una experiencia como delito.** Al mismo tiempo, estas encuestas permiten relevar dimensiones que los registros administrativos no suelen cubrir: inseguridad subjetiva, estrategias de autoprotección, características del entorno, confianza institucional y evaluación de las respuestas públicas.

El cuestionario relevó cinco grandes dimensiones: experiencias personales recientes de delito; percepciones y representaciones vinculadas con la inseguridad; prácticas personales y residenciales de protección; situaciones de conflicto, violencia y presencia visible de drogas reconocidas en el entorno inmediato; y evaluaciones de las instituciones y de distintas soluciones frente a la inseguridad. Esta información se complementó con características sociodemográficas y territoriales.

El instrumento distingue deliberadamente entre experiencias personales de delito, inseguridad subjetiva, conflictividad del entorno, prácticas de protección y evaluaciones institucionales. Las preguntas sobre victimización describen conductas y situaciones concretas, en lugar de utilizar una única categoría general de “delito”; a partir de ellas se construyen indicadores agregados sin perder el análisis de cada modalidad. Del mismo modo, la inseguridad percibida se releva por separado de haber sufrido un delito, y las valoraciones institucionales se interpretan como percepciones sociales sobre el funcionamiento de los organismos, no como mediciones objetivas de su desempeño.

En Argentina, la producción de este tipo de información ha sido relativamente discontinua. La Encuesta Nacional de Victimización (ENV) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y el Ministerio de Seguridad de la Nación, constituye la principal referencia nacional reciente. En el Partido de General Pueyrredon existen antecedentes valiosos, en particular las Encuestas de Percepción Ciudadana realizadas por MDPET en el marco de sus Informes de Monitoreo Ciudadano 2016 y 2018, y otros relevamientos posteriores, pero durante varios años no se contó con un estudio local de esta amplitud que integrara experiencias de delito, inseguridad subjetiva, territorio e instituciones.

Disponer nuevamente de información actualizada es especialmente importante en un problema cuya gestión involucra a distintos niveles del Estado y actores sociales. Las políticas de seguridad requieren articular registros administrativos con información sobre experiencias, percepciones y comportamientos que esos registros no ofrecen por sí solos. La cooperación entre el INHUS y MDPET combinó capacidades académicas con vínculos institucionales y comunitarios para producir y poner a disposición evidencia sobre un problema relevante para General Pueyrredon.

1. PREVALENCIA DEL DELITO

Este apartado analiza cuatro delitos declarados como sufridos personalmente durante los doce meses anteriores a la encuesta: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones y amenazas. La victimización total identifica haber padecido al menos uno de ellos. Los porcentajes de la sección se ponderan exclusivamente por sexo y edad.

La ponderación por sexo y edad corrige los dos desajustes básicos de composición de la muestra sin incorporar ajustes adicionales. Mejora la correspondencia con la estructura poblacional disponible, pero no convierte el relevamiento voluntario en una muestra probabilística ni corrige una posible autoselección vinculada con la experiencia de victimización. Por esa razón, los porcentajes describen la distribución ponderada de las respuestas obtenidas y deben utilizarse con cautela como estimaciones poblacionales.

Las cuatro preguntas comparten el mismo período de referencia y describen conductas concretas. A partir de ellas se construyen dos agrupamientos: delitos contra la propiedad –robo con violencia y robo sin violencia o hurto– y violencia interpersonal –lesiones y amenazas–. La unión de las cuatro modalidades conforma el indicador de victimización total. La misma persona puede haber sido víctima de uno o más de estos hechos.

1.1. Extensión general del delito

Cuadro 1. Indicadores agregados de victimización declarada

Indicador	N	% ponderado
Victimización total	1459	44,4
Victimización individual en delitos contra la propiedad: robos y hurtos	1463	35,6
Violencia interpersonal: lesiones o amenazas	1454	20,4

Nota: Los porcentajes están ponderados por sexo y edad. Los indicadores se superponen y no deben sumarse.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El 44,4% declaró haber padecido personalmente al menos uno de los cuatro delitos considerados. Los delitos contra la propiedad alcanzan al 35,6%, mientras que la violencia interpersonal llega al 20,4%.

Dentro de las experiencias declaradas predominan los robos y hurtos. La violencia interpersonal presenta un nivel menor, aunque afecta a alrededor de una quinta parte de las personas. En conjunto, la prevalencia declarada es elevada y debe interpretarse teniendo en cuenta las limitaciones del diseño muestral.

1.2. Prevalencia de los hechos delictivos

Cuadro 2. Prevalencia de las cuatro modalidades de delitos declarados

Tipo de hecho	N	Personas afectadas	% ponderado
Robo sin violencia o hurto	1462	434	27,6
Robo con violencia	1460	291	18,4
Amenazas	1456	265	17,1
Lesiones	1463	102	7,8

Nota: Las cantidades de personas afectadas son observadas y no ponderadas. Los porcentajes están ponderados por sexo y edad.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El robo sin violencia o hurto es el hecho más extendido, con 27,6%. Le siguen el robo con violencia, con 18,4%, y las amenazas, con 17,1%. Las lesiones presentan una prevalencia sensiblemente menor, de 7,8%. Las cuatro situaciones difieren en el tipo de interacción, el daño producido, las posibilidades de identificación del responsable y las barreras para su denuncia. El cuadro permite reconstruir la composición del conjunto de cuatro delitos analizado a partir de una unidad de referencia común.

La victimización individual en delitos contra la propiedad alcanza al 35,6% y reúne exclusivamente dos modalidades personales: robo con violencia y robo sin violencia o hurto.

El robo sin violencia o hurto constituye la modalidad más extendida, con 27,6%. La pregunta consultó si, durante el último año, la persona había sufrido un robo “sin violencia y sin amenazas” y ofreció como ejemplos el hurto de una cartera o un celular. La redacción de la pregunta diferencia el hecho de las sustracciones mediadas por coacción y facilita el reconocimiento de pérdidas cotidianas que podrían no ser nombradas espontáneamente como delito.

El robo con violencia alcanza al 18,4%. Se preguntó si, durante el último año, la persona había sufrido un robo realizado “por la fuerza o amenazándolo con usarla”. El enunciado permite diferenciar estas sustracciones de los robos sin violencia o hurto e identificar el uso o amenaza de fuerza como una característica específica del hecho.

La violencia interpersonal comprende lesiones o amenazas y alcanza al 20,4%. El agrupamiento reúne una forma de daño físico y otra de intimidación creíble, pero no las convierte en experiencias equivalentes.

Las amenazas constituyen el componente más extendido, con 17,1%. La pregunta planteó si alguien había amenazado con provocar un daño físico a la persona o su familia, a sus propiedades o a su reputación, de modo que la persona hubiera considerado que la amenaza podía realmente cumplirse.

Las lesiones alcanzan al 7,8%. La pregunta mencionó golpes, empujones o ataques que hubieran generado una lesión física –como moretones, fracturas o cortes– y excluyó expresamente aquellas cuyo motivo hubiera sido un robo u otro delito. Esta precisión diferencia el daño corporal como hecho principal de la violencia utilizada como medio para la sustracción de un bien.

1.3. Superposición y plurivictimización

Cuadro 3. Superposición entre delitos contra la propiedad y violencia interpersonal

Combinación	Casos observados	% ponderado
Sólo delitos contra la propiedad	369	23,6
Ambas dimensiones	180	11,9
Sólo violencia interpersonal	121	8,5
Ninguna de las dos dimensiones	779	56,0

Nota: Los porcentajes están ponderados por sexo y edad.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El 23,6% registró delitos contra la propiedad. Otro 11,9% combinó delitos contra la propiedad y contra la persona, mientras que el 8,5% declaró exclusivamente violencia interpersonal. El 56% no quedó comprendido en ninguno de los dos bloques. Entre quienes sí padecieron alguna de estas experiencias, el 53,7% presentó exclusivamente robos o hurtos, el 27,0% combinó afectaciones patrimoniales y violencia interpersonal y el 19,2% informó sólo lesiones o amenazas.

En el núcleo de cuatro delitos analizado predomina el componente patrimonial, pero la superposición es significativa: algo más de una cuarta parte de quienes padecieron alguno de los dos grupos combina afectaciones patrimoniales y violencia interpersonal.

Cuadro 4. Cantidad de tipos de delitos declarados

Cantidad de tipos de hecho	Casos observados	% sobre casos completos	% entre víctimas
Ningún hecho	779	56,2	–
Un tipo de hecho	397	26,3	60,1
Dos tipos de hecho	167	10,9	24,9
Tres tipos de hecho	66	4,1	9,3
Cuatro tipos de hecho	35	2,5	5,6

Nota: El porcentaje entre quienes padecieron al menos un delito excluye a quienes no declararon ninguno. Los porcentajes están ponderados por sexo y edad. El conteo refiere a tipos diferentes, no a la cantidad total de episodios.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

En el conjunto analizado, el 56,2% no declaró ninguno de los cuatro delitos, el 26,3% informó uno, el 10,9% dos, el 4,1% tres y el 2,5% los cuatro. Entre quienes padecieron al menos uno, el 60,1% declaró una única modalidad; el 24,9% informó dos, el 9,3% tres y el 5,6% las cuatro. En conjunto, el 39,9% de las personas que sufrieron un delito padeció al menos dos tipos diferentes y el 14,9% acumuló tres o cuatro.

El promedio ponderado entre las víctimas es de 1,60 tipos de hechos. La plurivictimización está presente, aunque la experiencia más habitual es haber sufrido una sola modalidad.

Cuadro 5. Combinaciones de hechos individuales más frecuentes

Combinación	Casos con ambos hechos	% sobre casos completos
Robo con violencia + robo sin violencia o hurto	165	10,2
Robo sin violencia o hurto + amenazas	121	7,6
Robo con violencia + amenazas	107	6,8
Robo sin violencia o hurto + lesiones	62	4,7
Lesiones + amenazas	62	4,6
Robo con violencia + lesiones	58	4,0

Nota: Las combinaciones indican que la persona declaró ambos tipos durante el período de referencia; no permiten afirmar que hayan ocurrido en un mismo episodio. Los porcentajes están ponderados por sexo y edad.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La combinación más frecuente reúne robo con violencia y robo sin violencia o hurto y alcanza al 10,2%. Le siguen robo sin violencia o hurto con amenazas, con 7,6%, y robo con violencia con amenazas, con 6,8%. Las tres combinaciones muestran que la acumulación más frecuente combina distintos tipos de robo o vincula una experiencia patrimonial con intimidación.

Las combinaciones con lesiones son menos frecuentes: robo sin violencia o hurto y lesiones alcanza al 4,7%, lesiones y amenazas al 4,6%, y robo con violencia y lesiones al 4,0%.

1.4. Denuncia e ingreso al sistema institucional

Después de cada respuesta afirmativa, el cuestionario preguntó si el hecho había sido denunciado a la policía. La pregunta no diferenció entre una presentación formal en comisaría o fiscalía, una comunicación al 911 o una intervención policial iniciada por otra vía. En consecuencia, la variable debe interpretarse como la declaración de que el hecho fue puesto en conocimiento de la policía y no necesariamente como constancia de una denuncia penal formal.

El 46,7% de quienes padecieron alguna de las cuatro modalidades indicó haber denunciado al menos una. La puesta en conocimiento de la policía es más frecuente en los hechos patrimoniales que en lesiones y amenazas:

Cuadro 6. Denuncia según tipo de hecho individual

Tipo de hecho	Personas afectadas	Denunciaron	% ponderado
Robo con violencia	291	163	55,5
Robo sin violencia o hurto	434	179	41,6
Lesiones	102	28	23,6
Amenazas	265	57	23,0

Nota: El denominador de cada porcentaje está formado únicamente por quienes declararon haber padecido personalmente el hecho. Las cantidades son observadas y los porcentajes están ponderados por sexo y edad. Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El robo con violencia presenta el mayor nivel de denuncia: 55,5% de las personas afectadas indicó haberlo comunicado a la policía. El robo sin violencia o hurto desciende al 41,6%. Las lesiones y las amenazas registran niveles claramente menores, de 23,6% y 23,0%, respectivamente.

La presencia de una sustracción –y en particular cuando existe coacción– se relaciona con una mayor puesta en conocimiento de la policía, mientras que lesiones y amenazas muestran un ingreso mucho menor al sistema institucional. La encuesta no releva los motivos y, por lo tanto, estas diferencias no deben interpretarse causalmente.

1.5. Factores asociados a la victimización declarada

Para examinar qué factores se relacionan con haber sufrido estos delitos se analizó un conjunto de variables personales, residenciales y contextuales. Como resultados principales se consideraron el robo con violencia, el robo sin violencia o hurto, las lesiones, las amenazas y la victimización total, definida como haber sufrido al menos una de esas cuatro modalidades. También se analizaron dos agrupamientos derivados: robos y hurtos y violencia interpersonal. Las variables explicativas fueron sexo, edad, educación, ocupación, convivencia con hijos, tipo de vivienda y zona.

En términos generales, las características observadas ordenan poco la distribución social y territorial de la victimización. La mayoría de las relaciones bivariadas es pequeña y los modelos multivariados presentan un ajuste global acotado. Ninguna de las variables consideradas – sexo, edad, educación, ocupación, convivencia con hijos, tipo de vivienda o zona de residencia– separa a la población en grupos claramente diferenciados de alta y baja victimización. Haber sufrido alguno de los delitos relevados aparece, por lo tanto, como una experiencia relativamente transversal a las condiciones sociales y residenciales incluidas en el análisis.

Dentro de este panorama hay algunas diferencias de magnitud comparativamente mayor. En los cruces entre variables categóricas se utiliza V de Cramer, un coeficiente de asociación que va de 0, sin relación, a 1, relación máxima. La relación más alta entre los factores destacados corresponde a la ocupación con los robos y hurtos ($V = 0,164$), seguida por la edad con las lesiones ($V = 0,152$). Con la zona de residencia, la relación es menor: $V = 0,120$ para robos y hurtos, $0,126$ para robo con violencia y $0,100$ para victimización total. La convivencia con hijos presenta $V = 0,112$ para robo con violencia. Aun en los valores máximos observados, los coeficientes son modestos: ninguna variable divide por sí sola a la muestra en grupos de riesgo radicalmente distintos.

La victimización total ajustada es de 43,3% entre mujeres y 49,5% entre varones. La diferencia se amplía en robos y hurtos (34,6% y 41,2%, respectivamente), mientras que en violencia interpersonal es menor (19,0% frente a 22,6%). El patrón muestra, por lo tanto, una diferenciación por sexo en cuanto al delito patrimonial: la diferencia entre varones y mujeres es más consistente en robo con violencia y robo sin violencia o hurto

y se atenúa en lesiones y amenazas. Una interpretación plausible remite a diferencias en rutinas cotidianas, movilidad y exposición a espacios públicos, laborales y de circulación. Si los varones están más expuestos a contextos donde existen oportunidades de sustracción, la brecha puede ampliarse en los delitos patrimoniales.

La edad muestra una relación cuya forma depende del hecho. En los análisis bivariados se utiliza categorizada y en los modelos multivariados como variable continua, con un término cuadrático cuando la relación no es lineal. La victimización total ajustada pasa de 42,4% a los 20 años a alrededor de 50,0% a los 45 y desciende a 36,1% a los 70. Los robos y hurtos presentan una curva semejante: 41,6% alrededor de los 45 años, frente a 29,6% a los 20 y 29,9% a los 70. En violencia interpersonal el patrón es distinto: la probabilidad ajustada cae de 27,6% a los 20 años a 15,8% a los 70, y en lesiones de 13,4% a 3,4%. Estas diferencias son compatibles con rutinas y exposiciones propias de distintas etapas del ciclo de vida, sin identificar un mecanismo causal.

La educación muestra un patrón categórico y no lineal. En victimización total, las probabilidades ajustadas son 54,3% para secundaria completa, 48,4% para superior incompleto, 46,6% para hasta secundaria incompleta y 43,4% para superior completo. En robos y hurtos, secundaria completa alcanza 47,3%, frente a 35,2% entre quienes completaron estudios superiores y 32,1% entre quienes no completaron la secundaria. El grupo de menor educación –que incluye primaria incompleta o completa y secundaria incompleta y que puede estar más asociado con posiciones sociales bajas– no ocupa, por lo tanto, el extremo de mayor victimización. No hay evidencia de un gradiente simple en el que la victimización disminuya a medida que aumenta la educación: el rasgo específico es la mayor exposición del grupo con secundaria completa.

La situación ocupacional también muestra perfiles distintos. En victimización total, empresarios (55,3%), desocupados (54,1%) y cuentapropistas (54,0%) presentan los valores ajustados más altos, mientras que los estudiantes registran el más bajo (36,5%). En robo sin violencia o hurto sobresalen empresarios (39,6%) y cuentapropistas (36,0%); en robo con violencia, las amas de casa (29,7%), seguidas por cuentapropistas y jubilados (26,5%). Los desocupados presentan el valor más alto de lesiones (11,8%) y, junto con los empresarios, niveles elevados de amenazas y violencia interpersonal. La ocupación no define, por lo tanto, un único orden de riesgo.

Estas diferencias son compatibles con rutinas y exposiciones distintas. El trabajo por cuenta propia y la actividad empresarial pueden implicar mayor movilidad en el espacio urbano; entre los desocupados pueden intervenir condiciones de inestabilidad y formas específicas de sociabilidad; y en las amas de casa, rutinas de cuidado y desplazamientos de proximidad. Se trata de hipótesis interpretativas compatibles con los resultados, no de mecanismos demostrados por la encuesta.

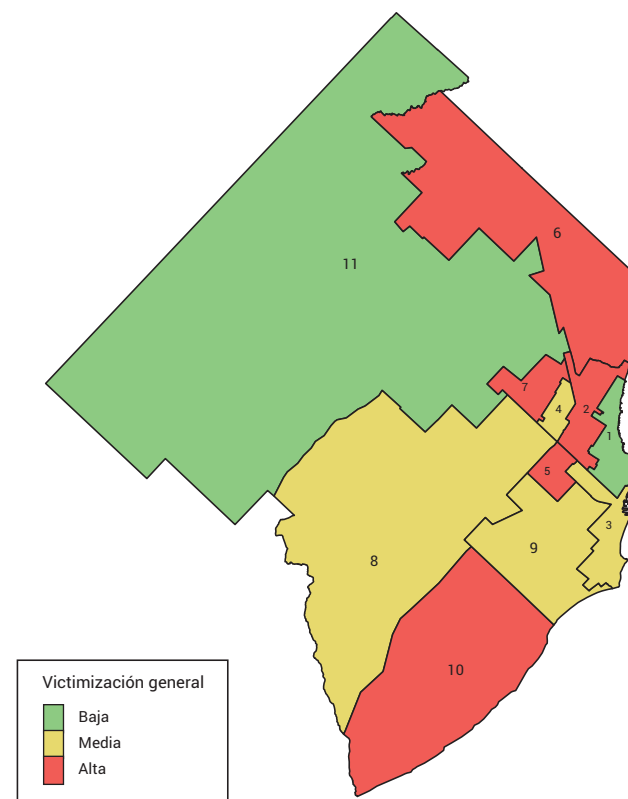
La convivencia con hijos muestra una diferencia bivariada apreciable: 52,0% de victimización total entre quienes conviven con hijos frente a 41,8% entre quienes no lo hacen. Parte de esa distancia se explica por edad y otras características, pero la diferencia permanece después del ajuste: las probabilidades son 49,8% y 42,7%, respectivamente. La asociación es especialmente visible en violencia interpersonal y amenazas y también aparece en robo con violencia y victimización total; en lesiones y robo sin violencia o hurto es más débil. No corresponde interpretar este resultado como un efecto causal de la paternidad o maternidad. La convivencia con hijos puede estar captando rutinas familiares, movilidad cotidiana, responsabilidades de cuidado y otras exposiciones no observadas.

El tipo de vivienda aporta información de forma selectiva. El contraste más informativo es entre casa y departamento o PH: las probabilidades ajustadas son muy próximas en victimización total (45,8% y 47,5%), robos y hurtos (37,4% y 38,5%) y robo con violencia (20,6% y 18,8%). La diferencia más nítida aparece en lesiones, con 9,5% en departamento o PH frente a 5,9% en casas; en violencia interpersonal también hay una diferencia moderada (24,1% frente a 19,6%). En consecuencia, la vivienda no define un gradiente residencial general de victimización: su aporte se concentra en algunas formas de violencia y es prácticamente nulo para la victimización total y los robos y hurtos.

La zona de residencia presenta asociaciones bivariadas acotadas con las distintas modalidades: $V = 0,126$ para robo con violencia, $0,115$ para robo sin violencia o hurto, $0,098$ para lesiones, $0,109$ para amenazas y $0,100$ para victimización total. Estos coeficientes se estiman sin ponderar.

Considerando las zonas definidas por Mar del Plata entre Todos (ver anexo), la victimización total se extiende desde 36,7% en la Zona 11 y 38,9% en la

**Mapa 1. Victimización general por zona.
General Pueyrredon, 2026**



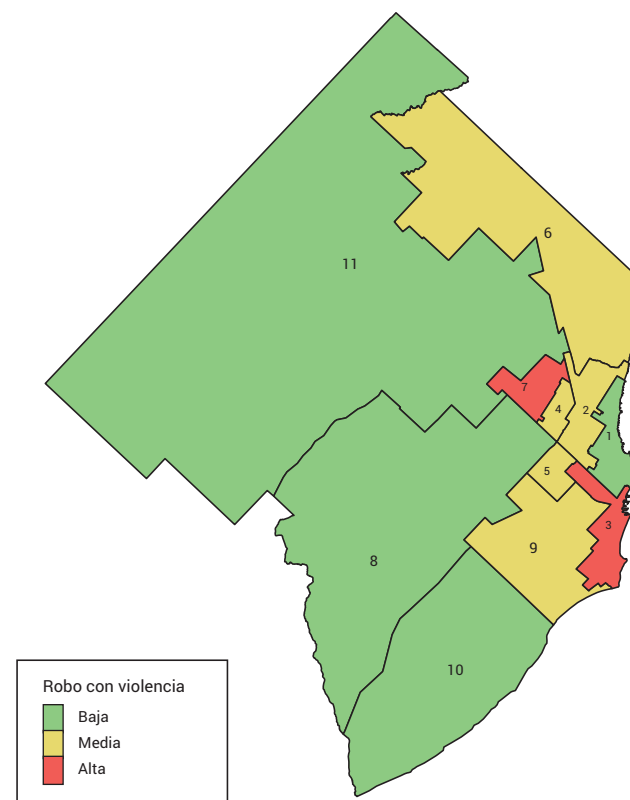
Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

Zona 1 hasta 51,3% en la Zona 10 y 52,1% en la Zona 5. La zona refiere al lugar de residencia de la persona encuestada y no necesariamente al lugar donde ocurrió el delito declarado. En las comparaciones entre polos de los mapas, las características poblacionales y residenciales registradas en el Censo 2022 se resumen mediante la mediana de los valores de las zonas que integran cada conjunto.

En el Mapa 1, el polo alto de victimización total –zonas 2, 5, 6, 7 y 10– reúne, en términos medianos, zonas más jóvenes (35,0 frente a 39,4 años), con menos años de escolarización (8,55 frente a 10,38), menor proporción de población con educación superior completa (7,6% frente a 19,4%), mayor desocupación (9,8% frente a 7,2%) y mayor proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) (6,0% frente a 4,0%) que el polo bajo, formado por las zonas 1 y 11. El contraste es sugestivo, pero no configura un gradiente social único: el polo bajo reúne dos territorios muy distintos, la Zona 1, central y comparativamente aventajada, y la Zona 11, rural o rururbana y de muy baja densidad. La victimización total aparece así parcialmente asociada con la composición social de las zonas, aunque conserva una heterogeneidad territorial importante.

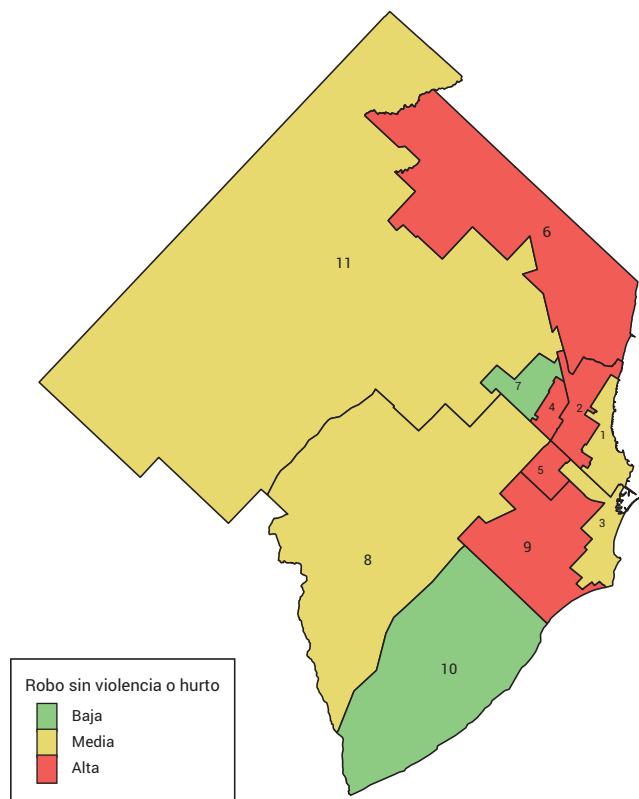
En el Mapa 2, el robo con violencia presenta una diferenciación principalmente territorial. El polo alto –zonas 3 y 7– está formado por dos áreas urbanas densas: la densidad promedio alcanza 3.027 habitantes por km², frente a 69 en el polo bajo –8, 10 y 11–. El centro de la ciudad tiene una configuración singular como zona objetivamente segura. Sin embargo, las dos zonas del polo alto son socialmente contrastantes: la Zona 3 presenta niveles educativos relativamente elevados y la Zona 7 niveles bajos. Edad, escolarización y NBI tampoco separan de manera consistente ambos polos. La distribución del robo

Mapa 2. Robo con violencia por zona.
General Pueyrredon, 2026



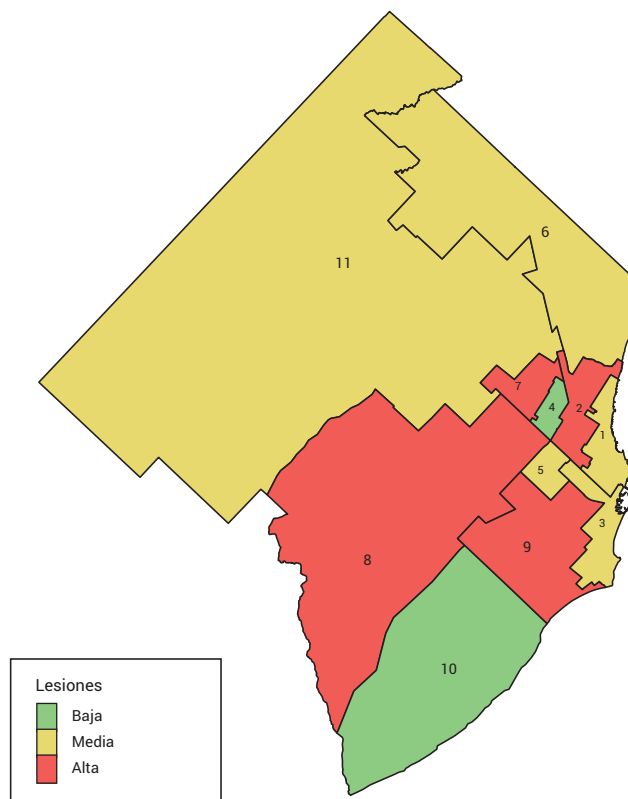
Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

**Mapa 3. Robo sin violencia o hurto por zona.
General Pueyrredon, 2026**



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

**Mapa 4. Lesiones por zona.
General Pueyrredon, 2026**



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

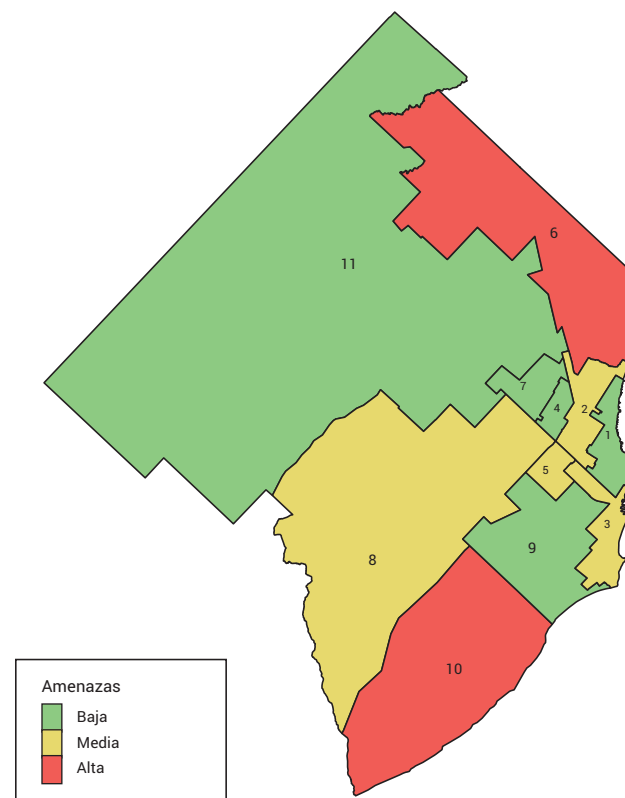
con violencia se vincula, por lo tanto, más claramente con el carácter urbano y la densidad que con un perfil socioeconómico común.

En el Mapa 3, el robo sin violencia o hurto muestra un patrón semejante. El polo alto –zonas 2, 4, 5, 6 y 9– tiene una densidad mediana considerablemente mayor que el polo bajo –zonas 7 y 10– (4.857 frente a 1.530 habitantes por km²) y una menor proporción mediana de hogares sin Internet (18,2% frente a 25,8%). En cambio, las diferencias de edad, escolarización y NBI son pequeñas. El polo alto combina zonas consolidadas, populares y periféricas, de modo que el contraste se organiza más por condiciones de urbanidad y acceso domiciliario a Internet que por una jerarquía social nítida.

El Mapa 4, correspondiente a lesiones, ofrece el contraste social más definido. Las zonas del polo alto –2, 7, 8 y 9– son, en términos medianos, más jóvenes que las del polo bajo –4 y 10– (34,3 frente a 37,3 años), presentan menos años de escolarización (8,26 frente a 9,12), menor proporción de población con educación superior completa (6,2% frente a 10,8%), mayor desocupación (9,7% frente a 8,6%) y mayor proporción de hogares con NBI (5,8% frente a 4,6%). La Zona 2, socialmente más aventajada que las otras del polo alto, matiza el gradiente, pero el patrón general se mantiene: las lesiones se concentran relativamente más en territorios jóvenes y con menores recursos educativos y sociales.

En el Mapa 5, las amenazas siguen otra lógica. El polo alto está integrado sólo por las zonas 6 y 10, ambas de muy baja densidad: la mediana es de 114 habitantes por km², frente a 3.031 en el polo bajo. También presentan un déficit de acceso domiciliario a Internet mucho mayor, con 33,5% de hogares sin Internet frente a 19,4%. No son, en cambio, las zonas con menor educación ni con mayor desocupación. El rasgo común del polo alto es principalmente territorial –periferia extendida, ruralidad o rururbanidad y baja densidad– más que una posición social desfavorable.

**Mapa 5. Amenazas por zona.
General Pueyrredon, 2026**



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

La jurisdicción policial de residencia ofrece una lectura territorial complementaria a las once zonas utilizadas en el informe, y es una unidad pertinente para un estudio sobre seguridad. Los resultados de victimización muestran una diferenciación acotada pero sustantivamente relevante, más visible en los delitos patrimoniales y mucho menor en la violencia interpersonal. En victimización total, la asociación con la comisaría es de magnitud reducida. Los porcentajes ponderados más elevados aparecen en las comisarías 15 (64,6%), 11 (54,3%) y 16 (53,6%), mientras que 14 (36,7%), 13 (37,1%) y 8 (37,4%) se ubican en el extremo inferior. En delitos contra la propiedad, la diferenciación por comisaría es más visible. Para robo con violencia, V de Cramer alcanza 0,134; para el agregado de robos y hurtos, 0,132; y para robo sin violencia o hurto, 0,125. En violencia interpersonal, el patrón es menos territorializado y las asociaciones de amenazas y lesiones con la comisaría son de menor magnitud. Se observan, sin embargo, algunos perfiles sustantivos: las jurisdicciones 5 y 9 con mayor componente de delito patrimonial; las jurisdicciones 3 y 13 con mayor peso relativo de amenazas y violencia interpersonal; la 16 con un perfil mixto; y la 12 y la 13 con niveles de victimización total o patrimonial comparativamente bajos. Estos resultados describen diferencias entre personas residentes en cada jurisdicción y no tasas de delitos ocurridos dentro de los límites de cada comisaría. Además, la distribución de los distintos tipos de delitos no depende únicamente de la calidad del trabajo policial en la jurisdicción, sino también de las dinámicas sociales de cada territorio, las oportunidades de delinquir que ofrecen los espacios y los bienes existentes, y otros factores que escapan a la actuación de las instituciones del sector de la seguridad.

1.6. Síntesis

La victimización total se construye con cuatro experiencias sufridas personalmente –robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones y amenazas– y alcanza al 44,4% con la ponderación por sexo y edad utilizada en esta sección. Los robos y hurtos constituyen el componente principal (35,6%); la violencia interpersonal alcanza al 20,4%.

La plurivictimización es relevante: el 39,9% de las víctimas declaró al menos dos tipos de hechos y el 14,9% tres o cuatro. Entre las víctimas, el promedio es de 1,60 tipos. La combinación más frecuente reúne los dos tipos de robo, seguida por las combinaciones de robos con amenazas.

El ingreso al sistema institucional es desigual. El 46,7% de las víctimas denunció al menos uno de los cuatro hechos. La denuncia es mayor en el robo con violencia (55,5%) y en el robo sin violencia o hurto (41,6%), y claramente menor en lesiones (23,6%) y amenazas (23,0%).

Las asociaciones con las características individuales, domésticas y residenciales son, en general, débiles y cambian según la modalidad de delito. Los robos y hurtos se diferencian relativamente más por sexo, edades intermedias, secundaria completa y algunas posiciones ocupacionales; la

violencia interpersonal, por edad y situación ocupacional. La convivencia con hijos agrega diferencias en victimización total y varias formas de violencia, mientras que el tipo de vivienda aporta de manera más selectiva. Ninguna de estas características define por sí sola grupos claramente separados de alta y baja victimización.

La distribución territorial tampoco define una única geografía. La lectura por polos de los mapas muestra que la victimización total alta aparece parcialmente asociada con zonas más jóvenes, menos escolarizadas y con mayor desocupación y NBI, pero sin formar un gradiente social uniforme. Los robos se diferencian más por condiciones de urbanidad y densidad; las lesiones presentan el contraste social más claro, con mayor presencia en zonas jóvenes y con menores recursos educativos y sociales; y las amenazas se concentran en dos territorios de muy baja densidad y fuerte déficit de acceso domiciliario a Internet. Estas diferencias refieren a la zona de residencia de quienes declararon los hechos, no al lugar donde ocurrieron.

2. INSEGURIDAD SUBJETIVA: REPRESENTACIONES, EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS

La inseguridad subjetiva no se reduce a una opinión general sobre el delito ni refleja de manera automática haber sufrido un delito. En este apartado se la analiza a partir de varios aspectos: las representaciones generales sobre la inseguridad, la evaluación de la evolución de la delincuencia, la sensación de seguridad en situaciones concretas y las prácticas que modifican la vida cotidiana. Los indicadores suelen orientarse en un mismo sentido, pero no miden lo mismo ni con la misma intensidad: preocupación general, temor situado y autoprotección son fenómenos relacionados pero distintos. La sección incorpora además la conflictividad barrial y los recursos de protección residencial como aspectos del entorno y de las respuestas frente a la inseguridad; no se los considera equivalentes del temor ni de condiciones objetivas del delito.

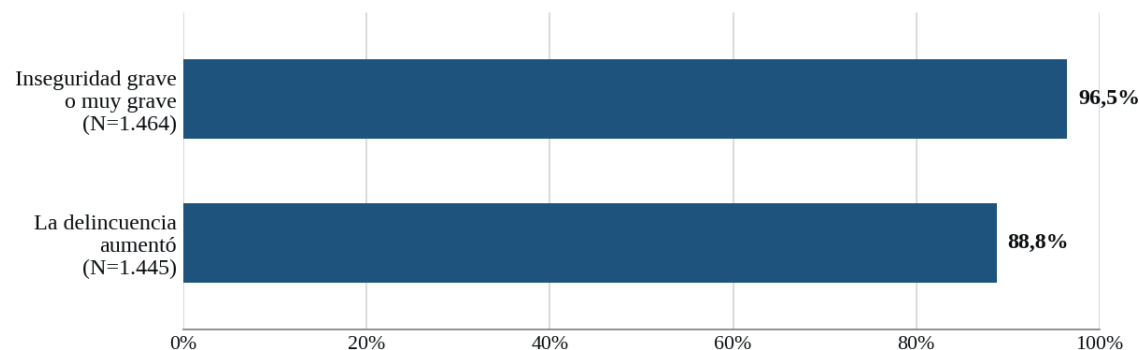
2.1. La inseguridad como problema grave y creciente

La evaluación general se relevó mediante la pregunta “¿Considera que hoy en Mar del Plata la inseguridad respecto al delito es un problema muy grave, bastante grave, poco grave o nada grave?”. El 67,8% eligió “muy grave” y el 28,7% “bastante grave”. Ambas categorías suman 96,5%; sólo el 3,1% la considera poco grave y el 0,5% nada grave. La distribución muestra un amplio consenso antes que una polarización. La respuesta más frecuente se ubica en el extremo más negativo y casi toda la población encuestada se concentra en las dos categorías de mayor gravedad.

La percepción de la tendencia reciente se midió preguntando “¿Usted diría que la delincuencia aumentó, se mantiene igual o disminuyó respecto a hace un año atrás?”. El 88,8% respondió que aumentó, el 10,5% que se mantuvo igual y el 0,8% que disminuyó. Se trata de una percepción sobre la evolución de la delincuencia y no de una medición objetiva de los hechos registrados. El predominio de “aumentó” es suficientemente amplio como para hablar de una evaluación ampliamente compartida.

En conjunto, ambas preguntas muestran una percepción de la inseguridad como un problema a la vez grave y creciente:

Gráfico 1. Evaluaciones generales negativas sobre la inseguridad



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

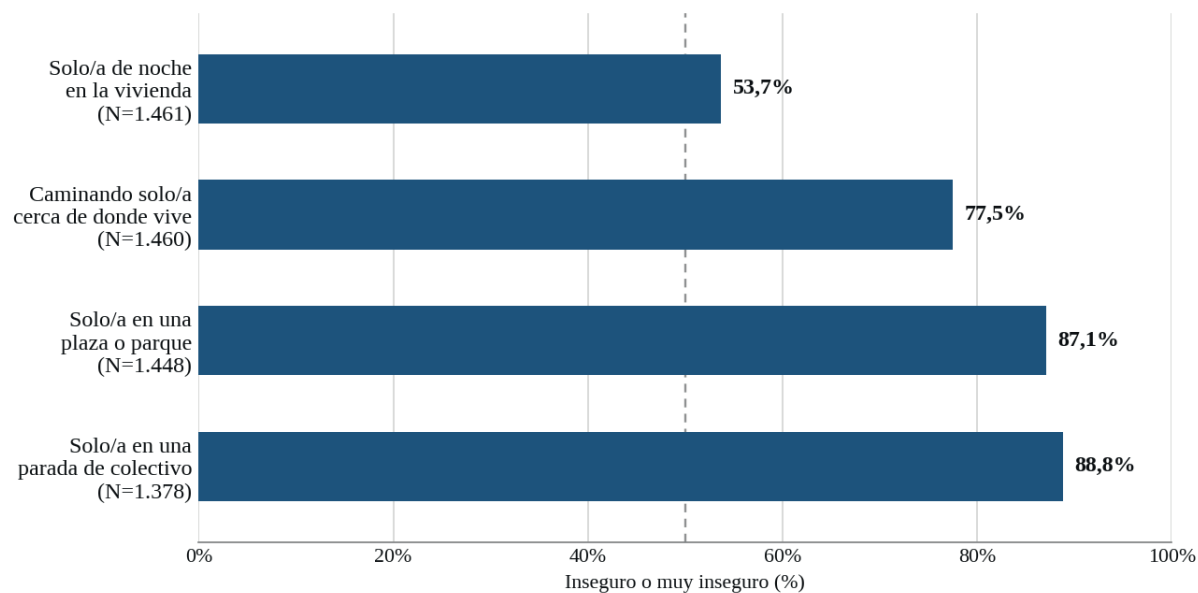
2.2. Percepción de seguridad en diferentes espacios y situaciones

La experiencia en situaciones concretas se relevó con la pregunta “¿Cómo diría que se siente en los siguientes lugares o situaciones: muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro?”. Se preguntó por cuatro situaciones: caminando solo o sola cerca de donde vive; estando solo o sola de noche en su casa; estando solo o sola en el parque o la plaza; y estando solo o sola en la parada de colectivo.

Las respuestas muestran diferencias claras según el espacio. La situación relativamente más protegida es permanecer solo o sola de noche en la vivienda: el 53,7% se siente inseguro o muy inseguro y el 46,3% seguro o muy seguro. El resultado está próximo al equilibrio y muestra que el hogar ofrece una protección relativa, no un refugio plenamente seguro. La referencia explícita a la noche debe tenerse presente al interpretar el resultado, porque delimita la situación evaluada.

Al caminar solo o sola cerca del domicilio, sin que la pregunta especifique un horario, la proporción que se siente insegura o muy insegura asciende al 77,5%. En plazas o parques alcanza el 87,1% y en paradas de colectivo el 88,8%. La respuesta extrema “muy inseguro” es especialmente frecuente en las paradas (48,0%), donde supera a “inseguro” y se convierte en la categoría más elegida.

Gráfico 2. Sensación de inseguridad según espacio o situación



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

Cuadro 7. Sensación de seguridad según situación

Situación	N	Muy seguro	Seguro	Inseguro	Muy inseguro
Solo/a de noche en su vivienda	1.461	7,6	38,7	35,7	18,0
Caminando solo/a cerca de donde vive	1.460	3,2	19,2	43,4	34,1
Solo/a en una plaza o parque	1.448	2,3	10,6	50,4	36,7
Solo/a en una parada de colectivo	1.378	3,9	7,3	40,8	48,0

Nota: Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

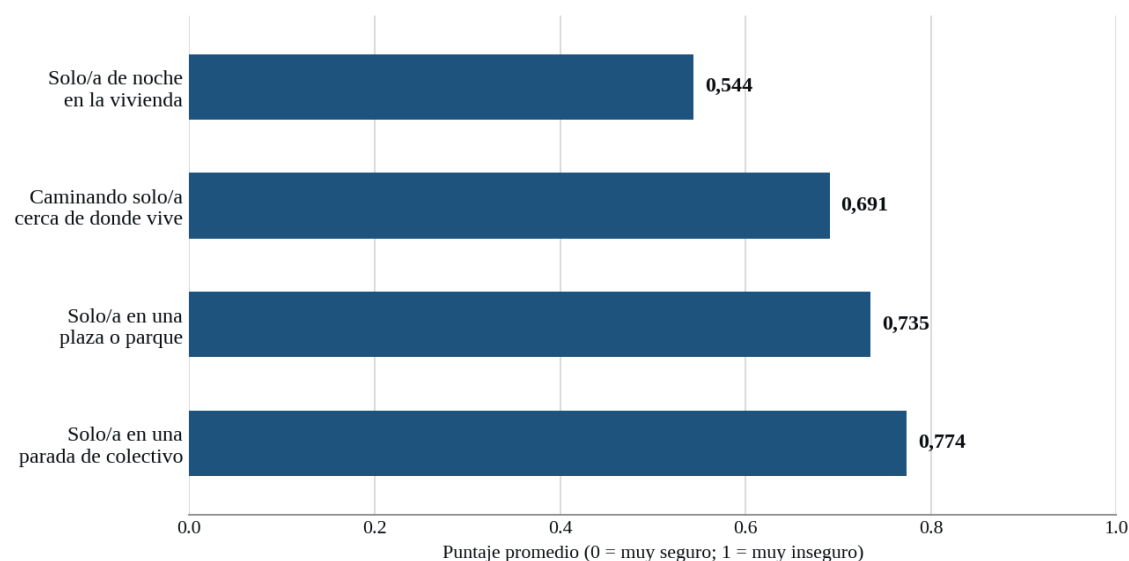
Entre la vivienda y la parada de colectivo hay una diferencia de aproximadamente 35 puntos porcentuales. La inseguridad se intensifica en espacios públicos de permanencia, circulación y espera. Las plazas y las paradas presentan resultados muy próximos, mientras que caminar cerca del domicilio ocupa una posición intermedia.

Los indicadores son coherentes, pero no uniformes. La preocupación general y la percepción de aumento se aproximan al consenso, mientras que el temor en situaciones concretas varía de manera importante. No hay una contradicción entre preocupación y experiencia, sino una diferencia de intensidad: el juicio general es casi unánime, pero la sensación concreta depende mucho de las condiciones de espacio y tiempo.

El Índice de Percepción de Seguridad (IPS) resume exclusivamente las cuatro situaciones anteriores. Cada respuesta fue recodificada en una escala entre 0 y 1: muy seguro = 0, seguro = 0,33, inseguro = 0,66 y muy inseguro = 1. El índice es el promedio de los cuatro componentes y se calculó únicamente cuando estaban disponibles los cuatro; no se utilizaron promedios parciales. Por lo tanto, valores más altos del IPS indican mayor inseguridad percibida.

La consistencia interna es elevada para una escala breve: el alfa de Cronbach es 0,780. Este valor indica que los cuatro componentes se integran de manera satisfactoria y permite utilizar el IPS como una medida sintética de inseguridad situada, sin suponer que todas las situaciones sean equivalentes. En particular, el hogar recibe una valoración más favorable que los espacios públicos y evita que el índice sea una simple reproducción del indicador más negativo.

Gráfico 3. Puntaje promedio de los componentes del Índice de Percepción de Seguridad (IPS)



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

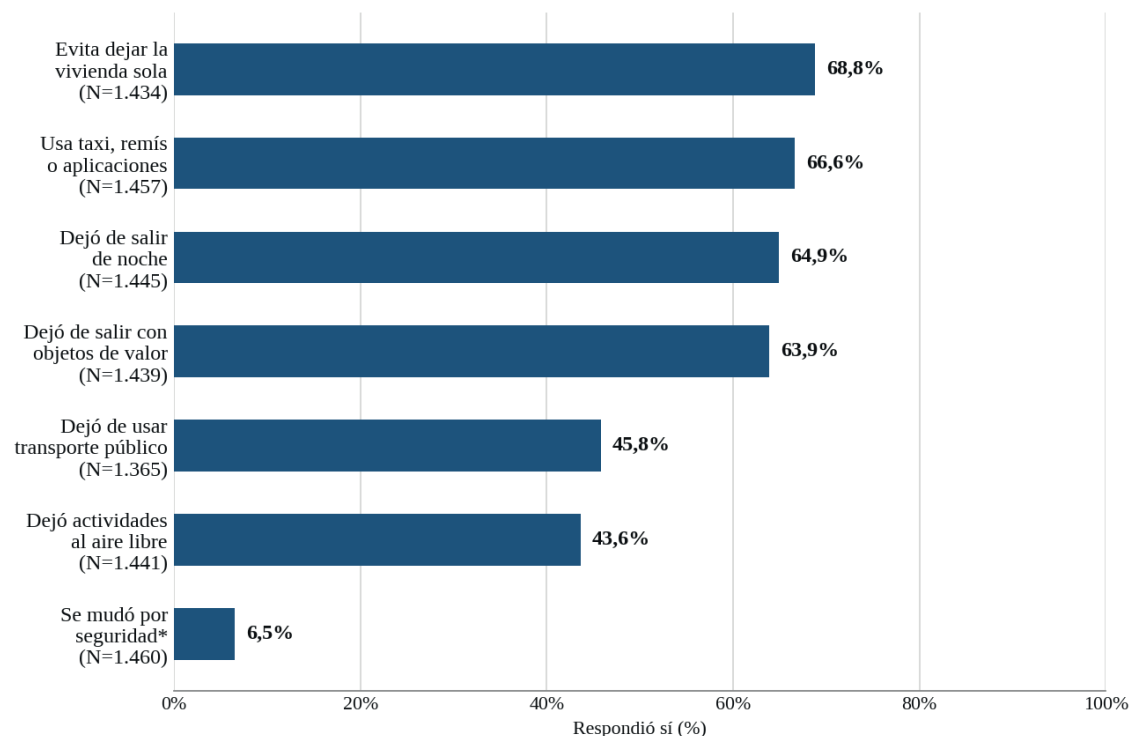
La media del IPS es 0,692 y la mediana 0,66. El primer cuartil se ubica en 0,58 y el tercero en 0,83, lo que muestra una concentración en valores medios y altos. El índice refleja la extensión de la inseguridad percibida, pero también introduce matices. La categoría más frecuente es la intermedia, no la alta, porque muchas personas combinan respuestas muy negativas en plazas o paradas con una sensación menos negativa en la vivienda.

2.3. Prácticas de adaptación a la inseguridad

Las modificaciones de la vida cotidiana se relevaron mediante la pregunta “En el último año, por razones de seguridad, ¿usted...?”, seguida de seis conductas: dejar de salir de noche; dejar de usar transporte público; dejar de salir con celular, joyas, relojes u otros objetos de valor; evitar dejar la casa sola; dejar de hacer actividades al aire libre como entrenar o caminar; y usar taxi, remís o aplicaciones como Uber o Cabify. La mudanza se preguntó por separado: “En el último año, ¿usted se mudó a otra vivienda o barrio por razones de seguridad?”.

Las prácticas más extendidas afectan el cuidado de la vivienda, los desplazamientos y la exposición de bienes. El 68,8% evita dejar la vivienda sola; el 66,6% utiliza taxi, remís o aplicaciones; el 64,9% dejó de salir de noche y el 63,9% dejó de salir con objetos de valor. Estas respuestas muestran una reorganización amplia de horarios, medios de transporte y rutinas de cuidado.

En un segundo nivel, el 45,8% dejó de usar transporte público y el 43,6% dejó de realizar actividades al aire libre. La mudanza por razones de seguridad es mucho menos frecuente, con 6,5%, pero su importancia en la vida de las personas y la exigencia que plantea en términos de medios materiales y capacidad de organización deben ser consideradas al dimensionar este dato. La respuesta predominante no es, por lo tanto, el abandono residencial, sino una contracción selectiva del uso de la ciudad y una adaptación cotidiana de los recorridos.

Gráfico 4. Prácticas adoptadas por razones de seguridad

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

Las prácticas no son equivalentes. Usar aplicaciones de transporte depende de la disponibilidad del servicio y de recursos económicos, mientras que dejar de salir de noche o abandonar actividades al aire libre supone una renuncia directa. Evitar que la vivienda quede sola puede requerir arreglos familiares y organizativos específicos. Por eso, el conjunto no debe interpretarse como una escala simple de gravedad, aunque sí muestra que la inseguridad se acompaña de restricciones concretas sobre la autonomía y el uso del espacio.

El Índice de Autoprotección Personal (IAP) sintetiza las seis prácticas incluidas en la pregunta anterior. Cada respuesta afirmativa fue codificada como 1 y cada respuesta negativa como 0; el índice expresa la proporción de conductas adoptadas. Al igual que el IPS y el ICB, se calculó únicamente cuando estaban disponibles todos los componentes y no se estimaron promedios parciales.

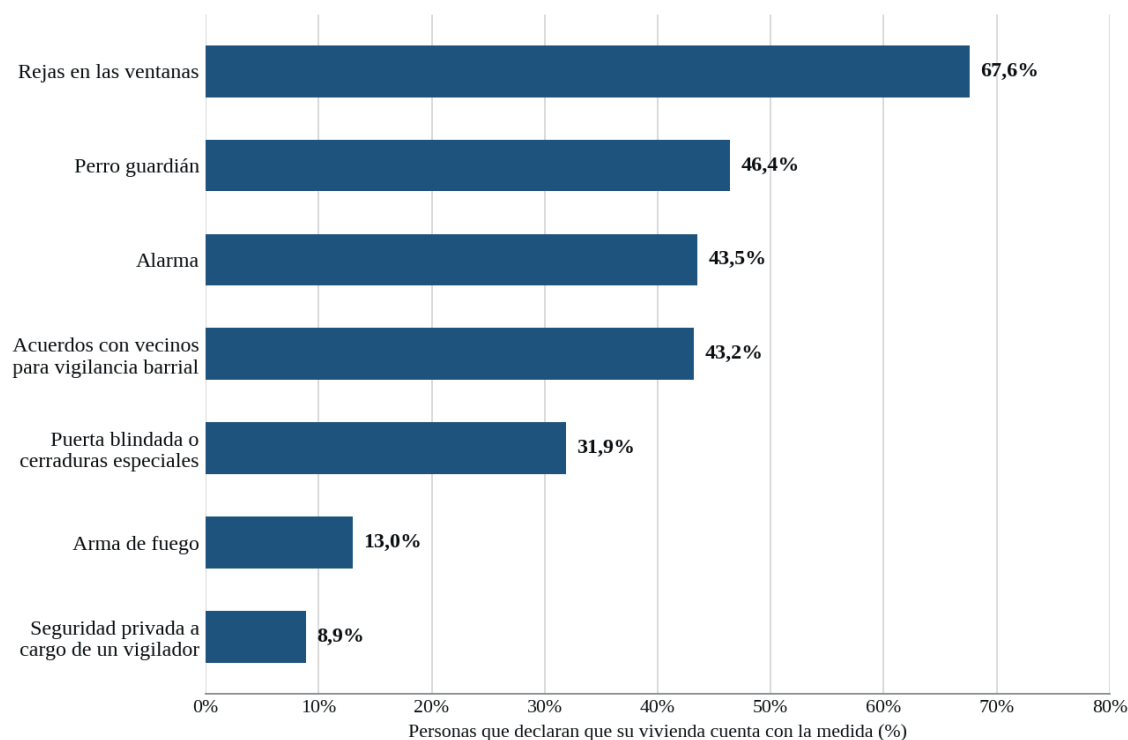
El índice excluye las medidas materiales de protección del hogar –como rejas, alarmas, perros, vigilancia privada o armas de fuego– porque dependen en gran medida del tipo de vivienda y de los recursos económicos. También excluye la mudanza por motivos de seguridad, relevada en una pregunta separada y distinta de las adaptaciones rutinarias. El IAP busca captar cambios personales de hábitos, no la capacidad patrimonial de adquirir protección de manera directa o indirecta.

La consistencia interna del índice es moderada pero aceptable: el alfa de Cronbach es 0,680. El valor permite utilizar el IAP como un resumen de conductas relacionadas, aunque no como una escala perfectamente homogénea. Esta heterogeneidad es esperable porque las prácticas combinan renuncias, cuidados domésticos y sustitución de medios de transporte.

La media ponderada es 0,594, equivalente a 3,6 conductas sobre seis. La mediana es 0,67, es decir, cuatro conductas. El primer cuartil corresponde a dos prácticas y el tercero a cinco. La categorización también responde a criterios sustantivos. Baja autoprotección comprende ninguna o una conducta; autoprotección media, de dos a cuatro; y alta, cinco o seis. El 16,1% se ubica en el nivel bajo, el 47,8% en el medio y el 36,1% en el alto. En conjunto, el 83,9% adoptó al menos dos de las seis conductas.

2.4. Medidas de protección disponibles en la vivienda

Este apartado analiza los recursos de protección que las personas encuestadas declaran tener actualmente en su vivienda. La unidad de observación es la persona encuestada. Por eso, los resultados se presentan como porcentajes de personas que declaran que su vivienda cuenta con cada recurso y no como una estimación independiente del porcentaje de hogares. La batería se introdujo mediante la pregunta “¿En su casa cuenta actualmente con...?”, seguida de siete recursos. La referencia temporal es el momento de la encuesta.

Gráfico 5. Recursos de protección disponibles en la vivienda

Nota: Los porcentajes se estiman con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio. Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La protección residencial no se concentra en una única modalidad. Predomina la fortificación física mediante rejas, pero se combina con perros, dispositivos tecnológicos y formas de cooperación vecinal. La vigilancia privada, que supone un servicio pago y continuo, ocupa el último lugar. La presencia de armas también es minoritaria y la pregunta no permite establecer su situación legal, su finalidad ni su eventual utilización.

Para conocer si las medidas aparecen de manera aislada o superpuesta se construyó un conteo de las respuestas afirmativas en los siete componentes. El cálculo se realizó cuando estaban disponibles respuestas en todos ellos; los NS/NC no fueron tratados como ausencia de protección.

Cuadro 8. Acumulación de recursos de protección en la vivienda

Cantidad de recursos	Casos observados	Porcentaje ponderado
Ninguna	127	8,4
Una	270	20,7
Dos	314	22,1
Tres o más	630	48,8

Nota: Los NS/NC no se consideran ausencia de protección. Media ponderada: 2,47 recursos; mediana: 2; rango: 0 a 7. Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio. Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

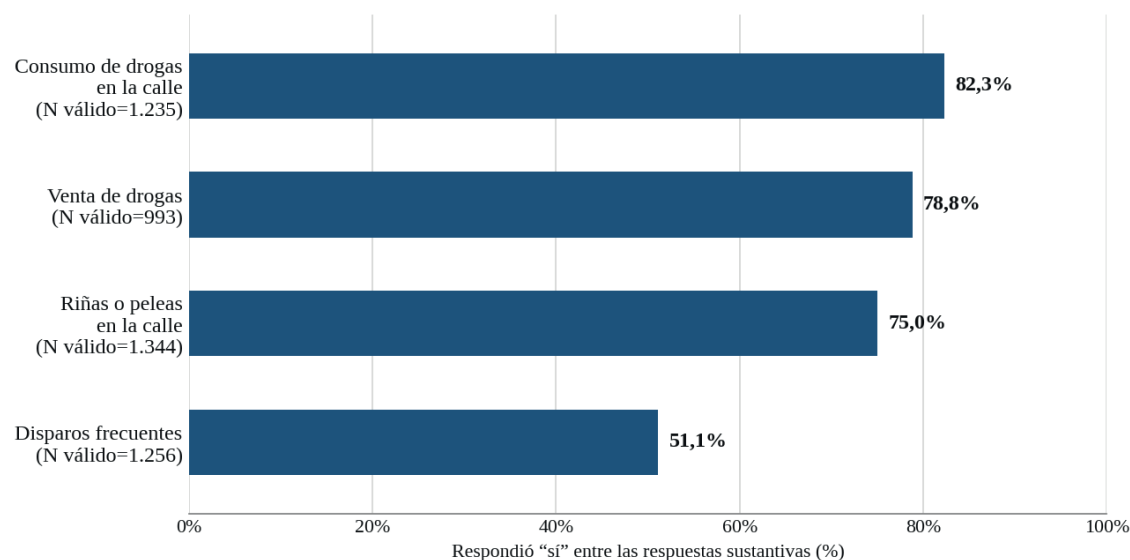
La protección residencial está ampliamente extendida: el 91,6% declara al menos uno de los siete recursos y el 48,8% acumula tres o más. En general, se combinan inversiones materiales, recursos domésticos y cooperación comunitaria, en lugar de depender de una sola estrategia.

2.5. Percepción de conflictividad barrial

La encuesta releva un aspecto específico de la experiencia residencial: las situaciones de conflicto y violencia, así como la presencia visible de drogas, que las personas dicen reconocer en su barrio. Estos indicadores no constituyen registros objetivos del conflicto o la violencia. Reflejan declaraciones de residentes que pueden depender de la visibilidad de los fenómenos, de la información vecinal y de distintos criterios para identificar cada situación.

La batería se introdujo mediante la pregunta “¿Podría decirme si en su barrio, durante el último año, hubo...?”. Cada situación admite una respuesta independiente, por lo que una misma persona puede reconocer varias y los porcentajes no deben sumar 100%. Las estimaciones utilizan una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio.

Gráfico 6. Situaciones reconocidas en el entorno residencial



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El consumo de drogas en la calle es la situación más extendida: alcanza al 82,3%. Le siguen la venta de drogas, con 78,8%, y las riñas o peleas en la calle, con 75,0%. Los disparos frecuentes ocupan el último lugar, aunque son reconocidos por algo más de la mitad (51,1%). Las respuestas NS/NC introducen una diferencia importante. En la venta de drogas alcanzan al 28,1% del total, casi el doble que en el consumo en la calle (14,1%) y claramente por encima de los disparos (11,4%) y las peleas (7,4%). La comercialización suele ser menos directamente observable y puede

reconocerse a partir de inferencias o rumores. Por eso, su elevado porcentaje afirmativo debe interpretarse junto con una proporción también alta de desconocimiento.

Para describir cuántas de estas situaciones se superponen se construyó un conteo simple de respuestas afirmativas. Se calculó únicamente para las 861 personas con respuestas “sí” o “no” en los cuatro componentes; los NS/NC no fueron tratados como ausencia del fenómeno.

Cuadro 9. Cantidad de situaciones reconocidas en el barrio

Cantidad de situaciones	Casos observados	Porcentaje ponderado
Ninguna situación	126	10,7
Una situación	72	7,1
Dos situaciones	89	9,7
Tres situaciones	242	25,8
Las cuatro situaciones	332	46,7

Nota: El análisis utiliza 861 casos con respuestas “sí” o “no” en los cuatro componentes; los NS/NC no se consideran ausencia de la situación. Media ponderada: 2,91; mediana: 3; primer cuartil: 2; tercer cuartil: 4. Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La acumulación es más frecuente que la aparición aislada. El 72,5% reconoce tres o cuatro situaciones y el 82,2% declara al menos dos. El resultado muestra que distintos fenómenos aparecen juntos en las respuestas sobre el entorno residencial. Sin embargo, el conteo exige información completa sobre los cuatro componentes, incluida la venta de drogas, que es el indicador con mayor proporción de NS/NC. Por lo tanto, esta distribución corresponde al subconjunto de personas que pudo responder los cuatro ítems y no debe proyectarse mecánicamente sobre toda la muestra.

El Índice de Conflicto Barrial (ICB) resume exclusivamente tres fenómenos directamente observables o audibles: riñas o peleas en la calle, consumo de drogas en la calle y disparos frecuentes. Cada respuesta afirmativa se codifica como 1 y cada respuesta negativa como 0; el índice continuo es el promedio de los tres componentes y adopta los valores 0, 0,33, 0,67 y 1. La venta de drogas no se incluye porque su reconocimiento puede depender en mayor medida de inferencias o información indirecta.

La consistencia interna del índice es moderada: el alfa de Cronbach es 0,640. Este nivel permite utilizar el ICB como síntesis descriptiva, pero aconseja mantener también la lectura de sus componentes. La relación más fuerte aparece entre riñas y consumo de drogas en la calle, mientras que los disparos se relacionan de manera más débil con los otros dos componentes.

Cuadro 10. Distribución del Índice de Conflicto Barrial (ICB)

Fenómenos reconocidos	Valor del ICB	Categoría	Casos observados	Porcentaje ponderado
0	0,00	Bajo conflicto barrial	151	11,4
1	0,33	Conflicto barrial medio	150	13,0
2	0,67	Conflicto barrial medio	359	30,0
3	1,00	Alto conflicto barrial	396	45,7

Nota: Media ponderada: 0,700; mediana: 0,667; primer cuartil: 0,667; tercer cuartil: 1,000. Bajo = ningún fenómeno; medio = uno o dos; alto = los tres. Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El 45,7% se ubica en alto conflicto barrial, es decir, reconoce los tres fenómenos incluidos en el índice. Otro 43,0% se encuentra en el nivel medio y declara uno o dos, mientras que el 11,4% no reconoce ninguno. En conjunto, el 75,6% identifica dos o tres situaciones, lo que indica que la conflictividad declarada suele presentarse de manera acumulada.

2.6. Factores asociados a la inseguridad subjetiva

La inseguridad subjetiva no se distribuye de manera uniforme. Sus componentes varían según características sociales y territoriales distintas, y haber sufrido recientemente un delito introduce una diferencia específica, sobre todo en el temor situado y las prácticas de autoprotección. La protección material de la vivienda y la conflictividad barrial siguen patrones propios.

Los análisis se organizan alrededor de cuatro resultados sintéticos: IPS, IAP, cantidad de recursos de protección residencial e ICB. El conjunto común de controles comprende sexo, edad, educación, ocupación, convivencia con hijos, tipo de vivienda y zona de residencia. Las medidas de asociación bivariada y los modelos multivariados se estiman sin ponderación. En cambio, cuando se presentan porcentajes o medias descriptivas por zona, se aplica la ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio utilizada en los descriptivos de esta sección. En los análisis bivariados la edad se utiliza categorizada; en los modelos se incorpora como variable continua. La victimización se agrega como factor explicativo para IPS e IAP.

El análisis bivariado confirma que los cuatro resultados se relacionan con factores distintos. En el IPS, las relaciones más altas entre los factores sociodemográficos, familiares, residenciales y territoriales corresponden a ocupación ($\eta^2 = 0,034$) – η^2 , al igual que V de Cramer, es un coeficiente de asociación entre 0 y 1– y zona (0,031), seguidas por sexo (0,017) y educación (0,015). Haber sufrido al menos uno de los cuatro delitos agrega una relación específica: la correlación punto-biserial alcanza 0,234 con el IPS; por modalidad, el valor es 0,252 para robo con violencia, 0,203 para robo sin violencia o hurto, 0,166 para lesiones y 0,154 para amenazas. En el IAP, ocupación ($\eta^2 = 0,028$) y zona (0,028), seguidas por sexo (0,025) y educación (0,023), presentan magnitudes próximas. También aquí la experiencia reciente de delito se relaciona sistemáticamente con el índice: la correlación punto-biserial alcanza 0,286 para la victimización total, 0,253 para robo con violencia, 0,223 para robo sin violencia o hurto, 0,210 para amenazas y 0,157 para lesiones. En la cantidad de recursos, el tipo de vivienda se diferencia con claridad ($\eta^2 = 0,168$), seguido por zona (0,053), convivencia con hijos (0,040), ocupación (0,039) y edad (0,030). En el ICB, la relación territorial es la más marcada: zona alcanza $\eta^2 = 0,082$, seguida por educación (0,048), ocupación (0,024) y edad (0,022). No hay razones teóricas para incorporar la victimización como factor explicativo de estos dos últimos resultados.

2.6.1. Percepción de seguridad

La victimización total presenta una asociación bivariada positiva con el IPS (r punto-biserial = 0,234). Entre sus componentes, las asociaciones son mayores para sentirse inseguro o insegura de noche en la vivienda ($V = 0,193$) y al caminar cerca del domicilio ($V = 0,181$), y disminuyen en

plazas o parques (0,129) y especialmente en paradas de colectivo (0,094). Las representaciones generales presentan asociaciones menores: $V = 0,104$ para considerar la inseguridad grave o muy grave y $V = 0,128$ para afirmar que la delincuencia aumentó, resultado compatible con la escasa variabilidad de indicadores próximos al consenso.

La desagregación por modalidad específica el patrón. El robo con violencia presenta la asociación bivariada más alta con el IPS (r punto-biserial = 0,252), seguido por el robo sin violencia o hurto (0,203), las lesiones (0,166) y las amenazas (0,154). El robo con violencia también muestra las asociaciones más altas con la inseguridad al caminar y al permanecer de noche en la vivienda. En las paradas de colectivo, en cambio, las asociaciones son pequeñas para las cuatro modalidades.

Los modelos multivariados permiten evaluar cuánto de estas relaciones bivariadas permanece cuando se consideran al mismo tiempo las características sociodemográficas, familiares, residenciales y territoriales.

Para el IPS, el modelo con los siete controles alcanza un R^2 de 0,100 (proporción de la variación individual que explica el modelo, en una escala de 0 a 1) y asciende a 0,143 al incorporar la victimización total; la victimización considerada por sí sola alcanza un R^2 de 0,054. El IPS medio observado es 0,636 entre quienes no registran victimización y 0,732 entre quienes sí la registran; después de los controles, los valores ajustados son 0,638 y 0,726. La incorporación de victimización incrementa el R^2 en 0,043 y constituye el bloque con mayor aporte propio al modelo.

Las diferencias sociales no desaparecen cuando se incluye victimización total. El IPS ajustado es 0,709 entre las mujeres y 0,642 entre los varones. Por ocupación, los valores son más altos entre amas de casa (0,735), empleados privados (0,706), desocupados (0,701) y cuentapropistas (0,695), y menores entre empleados públicos (0,638) y estudiantes (0,616). Estas diferencias son compatibles con exposiciones, rutinas y vulnerabilidades diferenciadas, sin implicar mecanismos causales que no son identificados por la encuesta.

Entre personas comparables, quienes sufrieron un delito presentan 13,9 puntos porcentuales más de inseguridad al caminar cerca de la vivienda, 17,4 puntos más al permanecer solo o sola de noche en la casa, 8,4 puntos más en plazas o parques y 5,8 puntos más en paradas de colectivo. Las representaciones generales se desplazan en la misma dirección, aunque con menor diferenciación por su efecto de techo: considerar la inseguridad grave o muy grave aumenta 3,9 puntos y percibir que la delincuencia aumentó, 8,7 puntos.

Los cuatro hechos se analizan además en modelos separados, manteniendo el mismo conjunto de controles, para identificar qué modalidades están detrás de esta relación general. El Cuadro 11 presenta las diferencias ajustadas en la escala del IPS y, para sus componentes dicotómicos, en puntos porcentuales de probabilidad.

Cuadro 11. Victimización y percepción de seguridad

Variable dependiente	Robo con violencia	Robo sin violencia / hurto	Lesiones	Amenazas
IPS	+0,108	+0,080	+0,118	+0,074
Inseguro/a caminando cerca de su casa	+19,0 pp	+10,7 pp	+18,6 pp	+12,5 pp
Inseguro/a solo/a de noche en su casa	+22,0 pp	+18,2 pp	+22,0 pp	+18,5 pp
Inseguro/a en plaza/parque	+11,2 pp	+7,6 pp	+10,2 pp	+4,2 pp
Inseguro/a en parada de colectivo	+4,7 pp	+6,3 pp	+6,7 pp	+2,5 pp

Nota: cada columna corresponde a un modelo separado. En la fila del IPS, los valores expresan diferencias ajustadas en puntos de la escala del índice; en las variables dicotómicas, diferencias en puntos porcentuales de probabilidad ajustada. Los resultados mantienen constantes los controles indicados en el texto. Las cuatro modalidades de victimización no se incorporan simultáneamente en estos modelos.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

Las modalidades no presentan asociaciones idénticas. El robo con violencia muestra diferencias ajustadas amplias al caminar cerca de la vivienda (+19,0 puntos porcentuales), permanecer solo o sola de noche en la casa (+22,0) y estar en una plaza o parque (+11,2). Las lesiones presentan un perfil muy próximo (+18,6, +22,0 y +10,2, respectivamente). El robo sin violencia o hurto se asocia con diferencias algo menores pero sistemáticas (+10,7 al caminar, +18,2 en la vivienda, +7,6 en plazas y +6,3 en paradas). Las amenazas se relacionan especialmente con la inseguridad al caminar (+12,5) y al permanecer de noche en la vivienda (+18,5), y mucho menos con plazas (+4,2) y paradas (+2,5).

Las zonas muestran perfiles diferenciados del IPS. En los descriptivos ponderados por sexo, edad, nivel educativo y territorio, la media varía entre 0,514 en la Zona 10 y 0,771 en la Zona 4. Esta secuencia no reproduce la victimización: la Zona 4 combina el IPS más alto con una victimización total intermedia, mientras que la Zona 10 presenta victimización alta y el IPS más bajo.

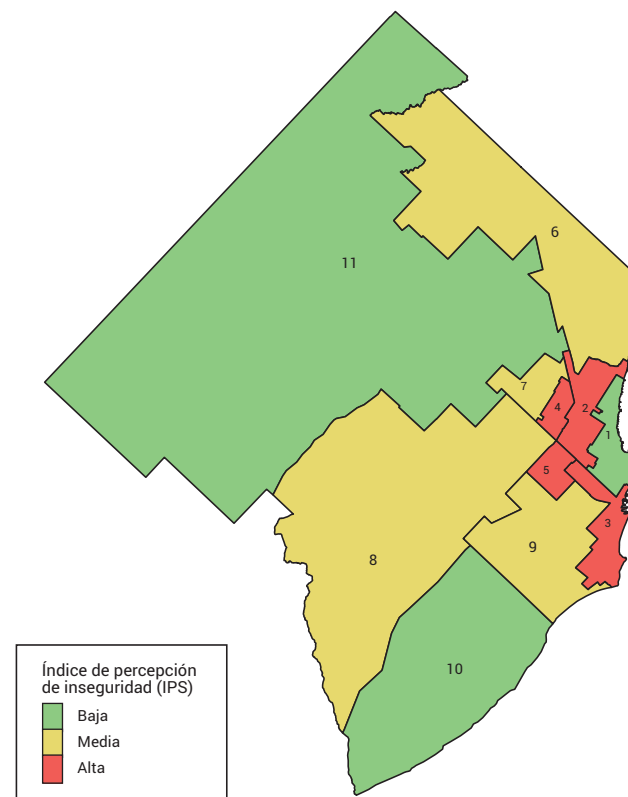
En el Mapa 6, el polo alto del IPS –zonas 2, 3, 4 y 5– se concentra en áreas netamente urbanas y densas. La densidad promedio es de 4.973 habitantes por km², frente a 22 en el polo bajo –zonas 10 y 11–. El centro de la ciudad tiene una configuración singular como zona subjetivamente segura. Sin embargo, el polo alto no es socialmente más desfavorecido: los años medios de escolarización son prácticamente iguales entre ambos grupos y el NBI mediano es incluso menor en el polo alto (3,1% frente a 5,6%). La Zona 1 constituye una excepción necesaria a una lectura puramente morfológica: es la zona más densa del partido y, al mismo tiempo, integra el polo bajo del IPS. La inseguridad percibida se asocia así con determinadas formas de urbanidad, pero no puede reducirse ni a la densidad ni a la privación social.

Incorporar la comisaría al modelo con los seis controles no territoriales incrementa el R² del IPS en aproximadamente 0,022. Los valores ajustados más altos aparecen en las comisarías N° 12, 11 y 16, mientras que los más bajos corresponden a la 14 y la 13. Estas jurisdicciones policiales no coinciden exactamente con las zonas representadas en los mapas, pero son convergentes con ellas en términos de la ubicación espacial de las percepciones ciudadanas.

2.6.2. Prácticas de protección personal

La relación bivariada es todavía más clara para las prácticas de autoprotección. La victimización total presenta una correlación punto–biserial de 0,286 con el IAP, superior a la observada con el IPS. Entre las prácticas individuales, las relaciones

Mapa 6. Índice de percepción de inseguridad (IPS) por zona. General Pueyrredon, 2026



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

más altas corresponden a evitar dejar la vivienda sola ($V = 0,224$), abandonar actividades al aire libre ($0,212$), evitar salir con objetos de valor ($0,198$) y dejar de salir de noche ($0,190$). El abandono del transporte público presenta una relación menor ($0,136$) y el uso de taxi, remís o aplicaciones se diferencia poco según victimización ($0,086$).

Los hechos específicos muestran perfiles distintos. El robo con violencia se asocia especialmente con el IAP (r punto-biserial = $0,253$), dejar de salir de noche y abandonar actividades al aire libre ($V = 0,220$ en ambos casos). El robo sin violencia o hurto se relaciona particularmente con evitar dejar la vivienda sola ($V = 0,203$). Las amenazas presentan una asociación relativamente alta con el IAP ($0,210$), el abandono de actividades al aire libre ($V = 0,181$) y la evitación de dejar la vivienda sola ($0,171$). Las lesiones muestran relaciones más acotadas con las prácticas rutinarias, pero, junto con las amenazas, se distinguen en la mudanza por razones de seguridad ($V = 0,167$ y $0,190$, respectivamente).

Realizar el análisis multivariado permite evaluar cuánto de estas diferencias permanece después del ajuste. El modelo del IAP con los siete controles alcanza un R^2 de $0,095$ y asciende a $0,172$ al incorporar la victimización total; la victimización considerada por sí sola alcanza un R^2 de $0,083$. El IAP medio observado es $0,483$ entre quienes no registran victimización y $0,656$ entre quienes sí la registran; después de los controles, los valores ajustados son $0,484$ y $0,656$. La incorporación de victimización incrementa el R^2 en $0,077$. El sexo presenta una diferencia adicional: en el modelo con victimización total las mujeres continúan mostrando un IAP ajustado mayor que los varones.

Cuando se neutraliza el efecto de otras variables del modelo, quienes registran alguna victimización presentan $20,3$ puntos porcentuales más de evitación de salir con objetos de valor, $20,2$ puntos más de abandono de actividades al aire libre, $18,4$ puntos más de restricción de las salidas nocturnas, $19,4$ puntos más de evitación de dejar la vivienda sola y $11,5$ puntos más de abandono del transporte público. También aumenta el uso de taxi, remís o aplicaciones ($+8,3$ puntos) y la mudanza por razones de seguridad ($+7,4$ puntos), aunque la diferencia es más moderada.

Estas relaciones no permiten establecer una secuencia temporal única. Tanto la victimización total como la mayoría de las prácticas refieren al pasado reciente: una conducta puede haber sido adoptada después de un hecho, haberlo precedido o formar parte de una adaptación más general a situaciones de riesgo. Los resultados muestran un vínculo estrecho entre haber sufrido alguno de los delitos relevados y la reorganización de la vida cotidiana, pero no identifican una dirección causal.

Cuadro 12. Victimización y autoprotección

Variable dependiente	Robo con violencia	Robo sin violencia / hurto	Lesiones	Amenazas
IAP	+0,171	+0,142	+0,172	+0,157
Dejó de salir de noche	+26,3 pp	+16,0 pp	+21,8 pp	+15,4 pp
Dejó de usar transporte público	+14,3 pp	+10,5 pp	+14,9 pp	+10,3 pp
Evita salir con objetos de valor	+19,3 pp	+14,7 pp	+17,2 pp	+19,8 pp
Evita dejar la vivienda sola	+18,7 pp	+18,6 pp	+22,0 pp	+19,6 pp
Dejó actividades al aire libre	+25,1 pp	+16,6 pp	+19,7 pp	+22,3 pp
Usa taxi/remís/aplicaciones	+3,9 pp	+5,8 pp	+9,7 pp	+6,6 pp

Nota: cada columna corresponde a un modelo separado. En la fila del IAP, los valores expresan diferencias ajustadas en puntos de la escala del índice; en las variables dicotómicas, diferencias en puntos porcentuales de probabilidad ajustada. Los resultados mantienen constantes los controles indicados en el texto. Las cuatro modalidades de victimización no se incorporan simultáneamente en estos modelos.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El robo con violencia se asocia de manera especialmente intensa con dejar de salir de noche (+26,3 puntos ajustados), abandonar actividades al aire libre (+25,1), evitar salir con objetos de valor (+19,3) y evitar dejar la vivienda sola (+18,7). El robo sin violencia o hurto presenta un patrón más distribuido: +18,6 puntos en evitar dejar la vivienda sola, +16,6 en abandonar actividades al aire libre, +16,0 en dejar de salir de noche y +14,7 en evitar objetos de valor. Las lesiones presentan diferencias amplias en varias conductas: +21,8 puntos en dejar de salir de noche, +22,0 en evitar dejar la vivienda sola, +19,7 en abandonar actividades al aire libre, +17,2 en evitar objetos de valor y +14,9 en dejar de usar transporte público. Las amenazas se vinculan con fuerza con abandonar actividades al aire libre (+22,3), evitar objetos de valor (+19,8) y no dejar la vivienda sola (+19,6).

La mudanza, que no integra el IAP, muestra sus mayores diferencias ajustadas entre quienes sufrieron lesiones (+13,4) y amenazas (+11,2). El uso de taxi, remis o aplicaciones es la conducta menos diferenciada por modalidad de victimización.

La ocupación vuelve a mostrar perfiles diferenciados. En el modelo que incluye victimización, las amas de casa presentan el IAP ajustado más alto (0,634), seguidas por jubilados (0,624), empleados privados (0,585), empresarios (0,579), cuentapropistas (0,564) y desocupados (0,561); los valores más bajos corresponden a empleados públicos (0,517) y estudiantes (0,483). Las combinaciones de prácticas también difieren: las amas de casa sobresalen en evitar salir con objetos de valor, los jubilados y desocupados en la restricción de salidas nocturnas y los estudiantes presentan valores bajos en transporte público y actividades al aire libre. Un mismo nivel de IAP puede resultar de combinaciones distintas de restricciones, sustituciones de movilidad y precauciones.

El IAP también presenta configuraciones territoriales propias. En los descriptivos zonales ponderados, la media varía entre 0,366 en la Zona 10 y 0,690 en la Zona 7. La primera combina baja autoprotección con victimización relativamente alta; la segunda reúne el IAP más elevado con conflictividad barrial alta y un IPS intermedio.

Incorporar la comisaría incrementa el R^2 del IAP en aproximadamente 0,023. Los niveles ajustados más altos aparecen en las comisarías N° 11, 12 y 3. Las diferencias son particularmente claras en dejar de usar transporte público y utilizar taxis, remises o aplicaciones, prácticas cuya distribución combina exposición territorial y posibilidades materiales de sustitución de la movilidad.

2.6.3. Protección residencial

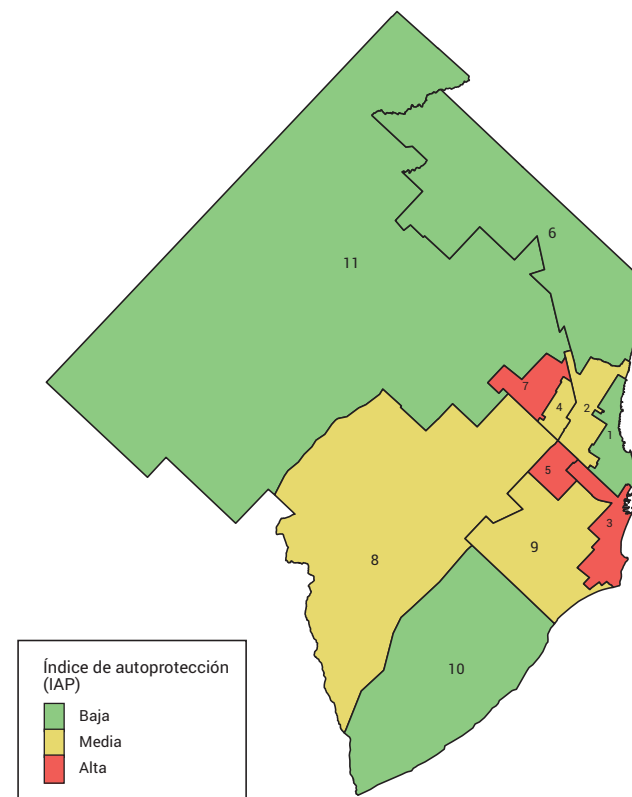
El tipo de vivienda es el principal organizador de la protección residencial. Su asociación bivariada con la cantidad de recursos alcanza $\eta^2 = 0,168$, claramente por encima de las restantes variables. En el modelo con los siete controles, la cantidad esperada es 2,83 en casa independiente y 1,63 en departamento o PH. La probabilidad ajustada de disponer de alarma es 61,1% en casa independiente y 23,2% en departamento o PH; la de tener rejas, 73,5% y 43,8%; y la de contar con perro guardián, 47,6% y 20,3%, respectivamente. La seguridad privada presenta otra lógica: la categoría de barrio privado o cerrado alcanza una probabilidad ajustada de 67,7%. La vivienda estructura sobre todo las posibilidades y formas de protección material, no necesariamente el nivel general de temor. La ocupación y la zona forman un segundo nivel de diferenciación, mientras la convivencia con hijos agrega un aporte más acotado.

La ocupación es un segundo factor de diferenciación de la protección residencial. Una vez consideradas las restantes características, los empresarios presentan la mayor cantidad esperada de recursos (3,25), seguidos por jubilados (2,65), empleados privados (2,52) y cuentapropistas (2,51). En el extremo inferior se ubican empleados públicos (2,16), desocupados (2,24) y estudiantes (2,26). La diferencia no remite solamente al número de medidas: entre los empresarios son particularmente frecuentes, después del ajuste, recursos que implican mayores desembolsos o capacidad material, como alarmas, puertas blindadas o cerraduras especiales y seguridad privada. La situación ocupacional parece captar así diferencias de recursos y condiciones materiales que se expresan en las modalidades disponibles de protección, sin constituir por sí misma una medida directa de nivel socioeconómico.

La convivencia con hijos agrega un aporte adicional, más acotado, a la protección residencial: una vez controladas las restantes variables, quienes conviven con hijos presentan una cantidad esperada de 2,61 recursos de protección, frente a 2,29 entre quienes no conviven con ellos. La diferencia aparece especialmente en la probabilidad ajustada de disponer de alarma (52,1% frente a 45,3%), perro guardián (43,9% frente a 35,1%) y acuerdos vecinales de vigilancia (49,5% frente a 40,0%); en rejas es menor (65,3% frente a 61,6%). La asociación puede reflejar responsabilidades familiares, etapas del ciclo de vida y condiciones residenciales, por lo que no debe interpretarse como un efecto causal autónomo de la convivencia con hijos.

La zona agrega una diferenciación territorial adicional en la protección residencial ($\eta^2 = 0,053$). En los descriptivos zonales ponderados, la cantidad media de recursos es 3,36 en la Zona 10; 2,82 en la 6; 2,79 en la 3; 2,77 en la 2; 2,58 en la 11; 2,55 en la 9; 2,53 en la 4; 2,49 en la 5; 2,37 en la 8; 2,29 en la 7; y 1,94 en la Zona 1. Una vez consideradas simultáneamente las restantes características, el aporte de la zona es más acotado que el del tipo de vivienda y la ocupación: incorporar la zona al modelo con los seis controles no territoriales incrementa el R^2 en aproximadamente 0,013.

**Mapa 7. Índice de autoprotección (IAP) por zona.
General Pueyrredon, 2026**



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

Los perfiles confirman que la protección residencial no se ordena mecánicamente con la inseguridad subjetiva: la Zona 10 combina la mayor cantidad media de recursos con los valores más bajos de IPS e IAP, mientras que la Zona 1 presenta la menor cantidad media de recursos junto con niveles relativamente bajos de ambos índices.

El Mapa 7 muestra un contraste algo diferente para el IAP. El polo alto –zonas 3, 5 y 7– vuelve a estar formado por zonas urbanas densas, con una densidad promedio de 3.637 habitantes por km² frente a 81 en las zonas 6, 10 y 11 del polo bajo. El centro se presenta nuevamente como un área singular en la que la población muestra mayor seguridad subjetiva. Además, presenta menor proporción mediana de educación superior completa (5,9% frente a 13,8%) y mayor desocupación (10,2% frente a 7,6%). El NBI es, en cambio, prácticamente idéntico entre ambos polos. La autoprotección alta parece combinar urbanidad, menor capital educativo y una inserción laboral más desfavorable, sin reproducir un gradiente general de privación.

La protección residencial adopta modalidades distintas según la jurisdicción. Las medidas que implican un desembolso económico más directo –alarma, puertas blindadas o cerraduras especiales y seguridad privada– tienen en la comisaría N° 9 su perfil más nítido una vez ajustadas las características individuales, familiares y residenciales. Las rejas alcanzan sus valores más altos en las comisarías N° 3 y 4, seguidas por las N° 16 y 12. El perro guardián sobresale en las 11 y 15; la tenencia de armas, en 15, 16, 6 y 12; y los acuerdos vecinales de vigilancia presentan su valor más alto en la comisaría N° 14. Más que una escala única de protección, las jurisdicciones expresan combinaciones diferentes entre recursos costosos, fortificación física y organización vecinal.

2.6.4. Conflictividad barrial

La conflictividad barrial es el resultado sintético con mayor diferenciación territorial. La zona alcanza $\eta^2 = 0,082$ en el análisis bivariado. En los descriptivos, el ICB medio varía entre 0,596 en la Zona 10 y 0,976 en la Zona 4. El modelo multivariado con los siete controles alcanza un R^2 de 0,155, y agregar la zona a los seis controles no territoriales incrementa el R^2 en aproximadamente 0,065. Educación y tipo de vivienda ocupan un segundo nivel de asociación, seguidos por ocupación; la conflictividad barrial percibida es menor entre quienes poseen educación superior completa.

El Mapa 8 hace visible esa diferenciación. El polo alto del ICB –zonas 4, 5, 6, 7 y 8– reúne zonas claramente más jóvenes que el polo bajo –zonas 1, 10 y 11– (mediana de la edad media zonal: 33,7 frente a 36,7 años), con menos años de escolarización (8,32 frente a 9,51), una proporción mucho menor de población con educación superior completa (5,9% frente a 14,8%) y mayor desocupación (9,9% frente a 7,3%). El NBI discrimina menos

entre los polos porque las zonas rurales o rururbanas 10 y 11, pese a su bajo ICB, presentan niveles relativamente elevados de privación en el acceso a servicios. El contraste educativo y laboral es, en cambio, consistente: la conflictividad barrial alta se concentra principalmente en zonas jóvenes, populares y con menor capital educativo.

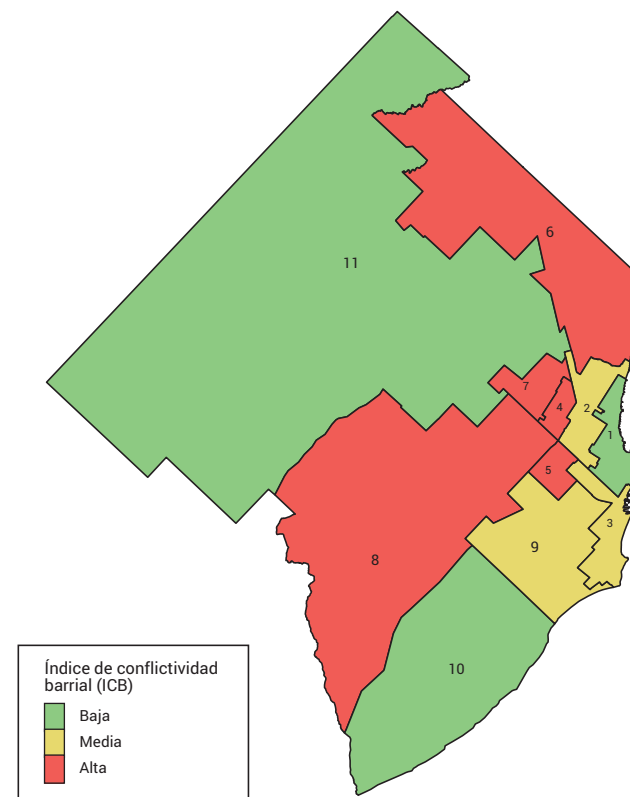
Esta lectura territorial es coherente con el análisis territorial presentado en el Anexo metodológico y es más clara que la observada para la victimización total. Debe interpretarse a nivel de zona: caracteriza los territorios con ICB alto y bajo, pero no implica que las personas con determinadas características censales sean necesariamente quienes reconocen mayor conflictividad.

En el ICB continuo, incorporar la comisaría al modelo con los seis controles no territoriales incrementa el R^2 en aproximadamente 0,086. Las comisarías N° 11, 12 y 15 presentan los valores ajustados más altos del índice y combinan, con matices, niveles elevados de riñas, consumo y venta de drogas y disparos frecuentes. En el extremo opuesto se ubican especialmente las comisarías N° 9 y 14. La magnitud del aporte territorial es claramente mayor que la observada para IPS e IAP.

2.7. Síntesis

La inseguridad aparece como una preocupación social ampliamente compartida: el 96,5% la considera grave o muy grave y el 88,8% percibe que la delincuencia aumentó. La experiencia situada es más variable: la vivienda aparece como el espacio relativamente más protegido, caminar cerca del domicilio ocupa una posición intermedia y las plazas, parques y paradas de colectivo concentran los niveles más altos de inseguridad.

Mapa 8. Índice de conflictividad barrial (ICB) por zona. General Pueyrredon, 2026



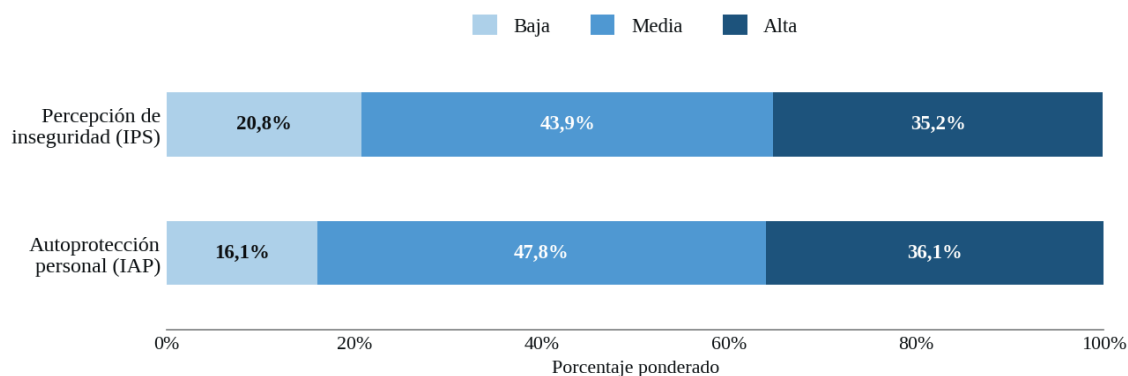
Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

La afectación de la vida cotidiana es amplia. Predominan las restricciones de salidas, el cuidado de la vivienda, la sustitución de medios de transporte y la reducción de la exposición de objetos valiosos; la mudanza es mucho menos frecuente. La protección residencial también está extendida y depende principalmente del tipo de vivienda y de los recursos disponibles.

La conflictividad barrial constituye un plano relacionado pero distinto: el consumo de drogas en la calle, la venta y las riñas son reconocidos por amplias mayorías, y el ICB muestra una acumulación importante de situaciones. Su consistencia moderada y la especificidad de la venta de drogas aconsejan conservar también la lectura de los componentes.

Ambos índices pueden resumirse de manera sintética:

Gráfico 7. Distribución categorizada del IPS y del IAP



Nota: IPS: baja < 0,50; media 0,50 a < 0,75; alta $\geq$ 0,75 (N=1.361). IAP: baja = 0 o 1 conducta; media = 2 a 4; alta = 5 o 6 (N=1.286). Los índices se calculan cuando están disponibles todos sus componentes.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

Las versiones categorizadas del IPS y el IAP presentan una estructura semejante, con predominio de niveles medios y alrededor de un tercio en los niveles altos, pero resumen dimensiones distintas: sensaciones ante espacios y situaciones, en el primer caso, y cambios de conducta, en el segundo.

La victimización total constituye el factor con mayor aporte propio al IPS y al IAP: incorporarla incrementa el R^2 en 0,043 y 0,077, respectivamente. Las lesiones y el robo con violencia presentan los mayores incrementos ajustados en ambos índices; las amenazas se vinculan especialmente con restricciones de la vida cotidiana y el robo sin violencia o hurto muestra diferencias algo menores pero consistentes.

La lectura territorial confirma que estas dimensiones no responden a una única lógica. El IPS alto se concentra sobre todo en áreas urbanas densas; el IAP alto combina urbanidad con menor capital educativo y mayor desocupación; y el ICB alto presenta el contraste social más definido, con zonas más jóvenes, menos escolarizadas y con mayor desocupación. Mantener separados temor, autoprotección, protección material y conflictividad permite describir mejor esas diferencias.

Los tres mapas de esta sección muestran estructuras territoriales diferentes. El IPS se organiza principalmente alrededor de un contraste urbano, el IAP combina ese componente con diferencias educativas y laborales, y el ICB presenta la polarización social más definida. Esta variación confirma la conveniencia de mantener separados percepción de inseguridad, autoprotección y conflictividad barrial. La desagregación por comisaría confirma que el territorio no funciona como un eje único: su importancia depende del tipo de experiencia o respuesta analizada. Incorporar la zona al conjunto de controles no territoriales incrementa el R^2 en aproximadamente 0,027 para el IPS y 0,026 para el IAP; en la protección residencial agrega alrededor de 0,013; y en el ICB, 0,065. La comisaría produce incrementos muy próximos para IPS e IAP (aproximadamente 0,022 y 0,023) y algo mayores para ICB (0,086).

3. CONFIANZA, DESEMPEÑO POLICIAL Y PREFERENCIAS SOBRE SOLUCIONES FRENTE A LA INSEGURIDAD

La sección analiza conjuntamente la confianza en las instituciones del sistema de seguridad pública, la evaluación de la capacidad de la Policía Bonaerense para controlar el delito en la zona de residencia y las preferencias sobre qué medidas deberían priorizarse frente a la inseguridad. En este informe, el sistema de seguridad pública incluye a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Patrulla Municipal y las fuerzas federales; entre estas últimas se encuentran la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El Poder Judicial se considera una institución vinculada con la seguridad. En la parte descriptiva se utiliza una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio; las medidas de relación bivariada y los modelos multivariados se estiman sin ponderar. Estos indicadores permiten describir las evaluaciones y preferencias de la población respecto del gobierno de la seguridad, pero no medir identidades ideológicas cerradas ni atribuciones generales de responsabilidad. Tampoco significa que haya respuestas adecuadas o inadecuadas, se trata de las preferencias subjetivas de los encuestados.

3.1. Confianza institucional: una legitimidad fuertemente diferenciada

La encuesta preguntó por la confianza en tres componentes del sistema de seguridad pública –fuerzas federales, Patrulla Municipal y Policía Bonaerense– y en el Poder Judicial mediante una escala de cuatro puntos: muy confiable, confiable, poco confiable y nada confiable. La escala no incluyó una categoría neutral. Por eso, “confiable” y “poco confiable” expresan posiciones moderadas dentro de los polos positivo y negativo, no un punto medio equidistante. Los porcentajes del cuadro se calculan con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio e incluyen NS/NC como categoría separada.

Cuadro 13. Confianza en instituciones vinculadas con la seguridad pública

Institución	Muy confiable	Confiable	Poco confiable	Nada confiable	Confianza acumulada	Desconfianza acumulada	NS/NC
Fuerzas federales	10,1	45,0	29,2	11,2	55,1	40,4	4,6
Patrulla Municipal	2,1	23,4	37,3	31,7	25,5	68,9	5,5
Policía Bonaerense	1,2	19,1	50,7	26,3	20,4	77,0	2,6
Poder Judicial	1,0	15,5	39,6	39,7	16,5	79,4	4,1

Nota: Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio e incluyen NS/NC como categoría separada.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El resultado central es una jerarquía institucional muy marcada, no una desconfianza homogénea. Las fuerzas federales son las únicas instituciones que reúnen una mayoría de respuestas de confianza: 55,1%, frente a 40,4% de desconfianza. La confianza se concentra principalmente en la categoría “confiable” (45,0%) y no en una adhesión intensa: sólo 10,1% las considera muy confiables. Se trata, por lo tanto, de una valoración comparativamente más favorable, pero no de un respaldo social pleno.

Las otras tres instituciones se ubican claramente del lado negativo. El Poder Judicial concentra la mayor desconfianza acumulada, 79,4%, y además presenta la proporción más alta de “nada confiable” (39,7%). La Policía Bonaerense registra 77,0% de desconfianza; en este caso predomina “poco confiable” (50,7%), lo que muestra una evaluación crítica extendida, aunque menos concentrada en el rechazo absoluto. La Patrulla Municipal obtiene una valoración algo menos desfavorable, pero igualmente negativa: 68,9% de desconfianza y 25,5% de confianza.

3.2. Confianza y evaluación del desempeño policial

El cuestionario no evaluó el desempeño de todas las instituciones incluidas en la pregunta de confianza. La única medición directa se refiere a cómo la población evalúa la forma en que la Policía Bonaerense controla el delito en la zona donde vive:

Cuadro 14. Evaluación del control del delito por la Policía Bonaerense

Indicador	Muy buena	Buena	Mala	Muy mala	Positiva acumulada	Negativa acumulada	NS/NC
Control policial del delito	0,9	15,5	41,4	37,6	16,5	79,0	4,6

Nota: Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio e incluyen 4,6% de NS/NC como categoría separada.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La evaluación se concentra con claridad en el polo negativo: 79,0% califica el control del delito como malo o muy malo, frente a 16,5% que lo considera bueno o muy bueno; 4,6% corresponde a NS/NC.

La Evaluación Negativa del Desempeño Policial (ENP) se obtiene recodificando la evaluación de la forma en que la Policía Bonaerense controla el delito en la zona donde vive la persona encuestada en una escala de 0 a 1: muy buena = 0, buena = 0,33, mala = 0,67 y muy mala = 1. Con la ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio, su media es 0,738. La ENP expresa la evaluación del desempeño policial en una sola dirección: cuanto mayor es el valor, más negativa es la valoración.

Confianza y evaluación del desempeño muestran resultados convergentes, pero no son equivalentes. El 77% desconfía de la Policía Bonaerense y 79,0% del total evalúa negativamente su control del delito. La confianza refiere a una relación general con la institución; la evaluación, a una tarea concreta en el territorio próximo. Entre quienes expresan confianza en la Policía Bonaerense, 46,9% también evalúa negativamente su desempeño. Una parte relevante reconoce, por lo tanto, algún grado de legitimidad institucional y al mismo tiempo cuestiona su funcionamiento.

3.3. Preferencias sobre soluciones frente a la inseguridad

La pregunta solicitó elegir una sola medida, aun cuando más de una pudiera parecer adecuada: “elija la que le parezca indispensable”. No se trata, por lo tanto, de una pregunta de respuestas múltiples y los porcentajes suman 100%. El diseño buscó identificar una prioridad relativa entre alternativas, obligando a elegir una sola opción aunque pudieran apoyarse varias. Los resultados expresan las percepciones, evaluaciones y creencias de las personas encuestadas sobre qué debería hacerse frente a la inseguridad. No constituyen recomendaciones de MDPET ni del INHUS, ni una evaluación de la eficacia objetiva de las medidas propuestas. Deben interpretarse como preferencias declaradas ante una elección entre alternativas y no como el conjunto completo de medidas que cada persona podría apoyar.

Cuadro 15. Medida considerada indispensable para resolver la inseguridad

Alternativa recodificada	% ponderado
Endurecer las penas y hacerlas cumplir en la cárcel	22,9
Mejorar la educación y generar más oportunidades laborales	22,8
Combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial	20,0
Aumentar la presencia policial	15,7
Fortalecer la prevención social del delito en los barrios	5,6
Fijar la edad de imputabilidad de los menores a partir de los 14 años	4,5
Combinación de medidas	3,5
Otras respuestas	2,3
Promover la tenencia legal de armas para defensa personal	1,4
NS/NC	1,3

Nota: N total = 1.470. Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio sobre el total e incluyen 1,3% de NS/NC.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

No aparece una alternativa mayoritaria. Las dos primeras opciones están prácticamente empatadas: endurecer las penas y hacerlas cumplir en la cárcel alcanza 22,9%, mientras que mejorar la educación y generar más oportunidades laborales reúne 22,8%.

En un segundo nivel se ubica combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, con 20,0%, seguida por aumentar la presencia policial, con 15,7%. Las demás alternativas reciben apoyos menores: fortalecer la prevención social del delito en los barrios alcanza 5,6%; fijar la edad de imputabilidad desde los 14 años, 4,5%; la combinación de medidas, 3,5%; otras respuestas, 2,3%; y promover la tenencia legal de armas para defensa personal, 1,4%.

La agrupación siguiente es una decisión analítica del informe construida a partir de las categorías de la variable recodificada. Permite comparar orientaciones generales sin ocultar las alternativas que integran cada familia conceptual.

Cuadro 16. Soluciones frente a la inseguridad agrupadas en familias conceptuales

Familia	Categorías recodificadas incluidas	Criterio de clasificación	%
Prevención social y reducción de desigualdades	Mejorar la educación y generar más oportunidades laborales; fortalecer la prevención social del delito en los barrios.	Intervenciones sobre oportunidades, inclusión y prevención territorial social.	28,4
Endurecimiento penal	Endurecer las penas y hacerlas cumplir en la cárcel; fijar la edad de imputabilidad a partir de los 14 años.	Aumento o adelantamiento de la respuesta penal y del castigo.	27,4
Reformas institucionales y mejora de la gestión pública	Combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.	Transformación del funcionamiento y la integridad de las instituciones.	20,0
Fortalecimiento policial y control territorial	Aumentar la presencia policial.	Mayor despliegue y capacidad de intervención policial; no implica por sí mismo endurecimiento penal.	15,7
Combinación de medidas	Respuestas abiertas que reclamaron explícitamente más de una alternativa.	Reconoce una concepción multidimensional que la pregunta de respuesta única no captaba plenamente.	3,5

Otras respuestas	Respuestas abiertas no clasificables de manera inequívoca en las familias anteriores.	Categoría residual conservada para evitar una recodificación forzada.	2,3
Autoprotección o provisión privada de seguridad	Promover la tenencia legal de armas para defensa personal.	Traslado parcial de la protección al ámbito individual y privado.	1,4
NS/NC	NS/NC.	Ausencia de una alternativa seleccionada.	1,3

Nota: N total = 1.470. Las familias se construyen sobre la variable recodificada de soluciones. Los porcentajes están estimados con una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio; combinación de medidas, otras respuestas y NS/NC se presentan como categorías separadas.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La agrupación confirma un escenario prácticamente dividido. La prevención social y la reducción de desigualdades alcanzan 28,4% del total, apenas por encima del endurecimiento penal, que reúne 27,4%. Excluyendo NS/NC, ambas orientaciones representan 28,8% y 27,8%, respectivamente. El Balance entre Orientación Punitiva y Prevención Social (BOPPS) es -0,010, equivalente a una diferencia de alrededor de un punto porcentual a favor del polo social-preventivo: ninguno de los dos polos predomina de manera sustantiva. El BOPPS asigna +1 a las respuestas explícitamente punitivas –endurecer penas y reducir la edad de imputabilidad–, -1 a las respuestas social-preventivas –educación y oportunidades laborales y prevención social en los barrios– y 0 a las restantes soluciones.

Las reformas institucionales constituyen una tercera orientación importante, con 20,0%, mientras que el fortalecimiento policial y el control territorial alcanzan 15,7%. Esta última categoría no debe confundirse automáticamente con punitivismo: aumentar la presencia policial puede expresar una demanda de despliegue preventivo, capacidad operativa, proximidad o respuesta más eficaz, sin implicar por sí misma penas más duras.

La provisión privada de seguridad mediante la tenencia legal de armas es claramente minoritaria, con 1,4%. Este dato matiza la idea de una retirada generalizada hacia la autoprotección armada.

La principal tensión es la coexistencia entre una relación crítica con las instituciones y una demanda persistente de intervención estatal. La baja confianza en la Policía Bonaerense no elimina el apoyo a una mayor presencia policial; tampoco la evaluación negativa conduce necesariamente a privilegiar soluciones privadas. Entre quienes consideran indispensable aumentar la presencia policial, 76,4% desconfía de la Policía Bonaerense y

83,7% evalúa negativamente su desempeño. Para una parte de la población, el reclamo de mayor presencia policial parece expresar insatisfacción con la capacidad actual y no una adhesión acrítica.

La alternativa de combatir la corrupción muestra una relación aún más directa. Entre quienes la priorizan, 90,0% desconfía de la Policía Bonaerense y 88,8% evalúa negativamente su desempeño; 83,2% combina ambas posiciones. Estos valores superan claramente los niveles generales y permiten interpretar la opción como una demanda de reforma y fortalecimiento institucional, no como rechazo de toda intervención estatal.

Las preferencias tampoco se ordenan en un único eje. Las alternativas sociales, penales, institucionales y policiales reciben apoyos importantes y relativamente próximos. Como el instrumento obligó a elegir una sola medida, no es posible determinar con precisión hasta qué punto esas preferencias coexisten en cada persona.

3.4. Factores asociados a la confianza, evaluación y soluciones

No existe un único perfil social o territorial relacionado con las evaluaciones institucionales y las preferencias sobre soluciones. Edad, educación, ocupación y territorio cambian de importancia según la institución o el tipo de solución analizada, mientras que la presencia de hijos y el tipo de vivienda agregan información más selectiva. La victimización total introduce además una diferencia propia, especialmente en la evaluación del desempeño policial, pero su aporte es mucho menor cuando se analizan las preferencias sobre soluciones frente a la inseguridad.

3.4.1. Instituciones

Las relaciones bivariadas de los factores sociodemográficos y territoriales son de magnitud acotada. En la confianza en las fuerzas federales destacan edad ($V = 0,156$), ocupación ($0,151$) y zona ($0,149$), seguidas por educación ($0,121$). En la Patrulla Municipal, edad ($0,150$) y ocupación ($0,149$) presentan magnitudes muy próximas, seguidas por zona ($0,136$). En la Policía Bonaerense, ocupación ($0,118$) y zona ($0,116$) presentan magnitudes prácticamente equivalentes, seguidas por edad ($0,097$). En el Poder Judicial sobresalen zona ($0,144$) y educación ($0,116$); para la evaluación negativa del control policial, el valor más alto corresponde a ocupación ($0,142$), mientras que la zona alcanza $0,097$. Ninguno de estos coeficientes muestra por sí solo una diferenciación social o territorial fuerte.

La victimización presenta relaciones bivariadas casi nulas con la confianza institucional y la asociación aumenta para la evaluación negativa del control policial ($V = 0,120$) y para la ENP, tratada como variable continua (r punto-biserial = $0,167$). Desagregar por modalidad refuerza esta diferencia. El robo con violencia presenta la asociación más alta con la ENP (r punto-biserial = $0,190$) y con la evaluación negativa del control policial ($V = 0,122$). Las amenazas muestran también una relación apreciable con la ENP ($0,135$) y son la modalidad con mayor asociación bivariada con la desconfianza en la Policía Bonaerense ($V = 0,099$).

La confianza en las fuerzas federales presenta principalmente un gradiente de edad. En el modelo con los siete controles, la probabilidad ajustada de confianza aumenta de 37,6% a los 20 años a 49,2% a los 40, 60,9% a los 60 y 66,5% a los 70. La ocupación y la educación también diferencian las respuestas, pero con menor claridad. El patrón es compatible con diferencias de ciclo de vida, socialización institucional y experiencia cotidiana con organismos que no cumplen el mismo papel de proximidad que la policía provincial.

En la Patrulla Municipal se combinan edad, ocupación y territorio. La probabilidad ajustada de confianza aumenta desde alrededor de 16,0% a los 20 años hasta 34,3% a los 70. El tipo de vivienda aporta una diferencia adicional, concentrada en una menor confianza entre quienes residen en departamento o PH respecto de quienes viven en casa. Estas asociaciones son compatibles con rutinas distintas de uso del espacio público y contacto con dispositivos municipales.

La Policía Bonaerense y el Poder Judicial presentan lógicas sociales diferentes. En el Poder Judicial, la educación tiene mayor peso pero no define un gradiente lineal: la confianza es 27,6% entre quienes poseen hasta secundaria incompleta, 13,6% con secundaria completa, 16,5% con superior incompleto y 14,0% con superior completo. Los varones presentan además menor confianza que las mujeres (13,0% frente a 17,4%).

En la confianza en la Policía Bonaerense, los empleados públicos alcanzan 22,9% de confianza, frente a 16,3% entre empleados privados y 15,1% entre cuentapropistas; los empresarios presentan un valor menor, de 10,5%. La evaluación del desempeño de la Policía Bonaerense muestra una diferenciación territorial acotada: la asociación bivariada de la zona con la evaluación negativa es $V = 0,097$ y con la ENP alcanza $\eta^2 = 0,012$. En este resultado, la ocupación presenta una asociación bivariada mayor que la zona. El modelo lineal de la ENP con los siete controles alcanza un R^2 de 0,053.

Haber sufrido alguno de los cuatro delitos considerados aporta un componente propio a las evaluaciones institucionales, aunque de manera selectiva. Los modelos logísticos presentan la misma jerarquía sustantiva: las diferencias relacionadas con victimización son pequeñas en la desconfianza hacia las fuerzas federales y el Poder Judicial, mayores en la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense, y más claras en la

evaluación negativa del control policial. En la ENP, el valor ajustado pasa de 0,709 entre quienes no registran victimización a 0,781 entre quienes sí la registran. El R^2 se incrementa de 0,053 a 0,076 al incorporar victimización total; la victimización considerada por sí sola alcanza 0,031.

Los modelos separados por modalidad de delito precisan el patrón observado. La desconfianza en la Policía Bonaerense aumenta 8,4 puntos entre quienes sufrieron robo con violencia y 8,9 entre quienes recibieron amenazas, frente a 3,5 puntos en robo sin violencia o hurto y 1,8 en lesiones. La evaluación negativa aumenta 10,6 puntos en robo con violencia, 6,7 en amenazas, 5,3 en robo sin violencia y 1,3 en lesiones.

La distribución territorial de la ENP muestra diferencias acotadas pero sustantivas. En los descriptivos ponderados, la media varía entre 0,615 en la Zona 11 y 0,832 en la Zona 10. Esta última combina la evaluación más negativa con bajos niveles de confianza en la Policía Bonaerense y el Poder Judicial; la Zona 11 presenta el patrón opuesto. El contraste confirma que confianza y evaluación del desempeño están relacionadas, pero no son equivalentes.

En el Mapa 9, el polo alto de ENP –zonas 3, 8 y 10, es decir, las evaluaciones más negativas– no conforma un perfil social homogéneo. Frente al polo bajo –zonas 2, 4 y 11– presenta mayor proporción mediana de hogares con NBI (5,6% frente a 3,7%), mayor proporción de hogares sin acceso a internet (27,2% frente a 19,4%) y una densidad mediana mucho menor (163 frente a 5.862 habitantes por km²), pero no menor escolarización ni menor proporción de población con educación superior completa. La Zona 3, urbana y relativamente escolarizada, es además distinta de las zonas 8 y 10. La evaluación negativa del desempeño policial se organiza, por lo tanto, de manera heterogénea y no reproduce una jerarquía social simple.

3.4.2. Soluciones

En las preferencias sobre soluciones, la relación bivariada de la victimización total con la distribución completa de alternativas alcanza V de Cramer = 0,145. Con el BOPPS, la correlación punto–biserial es 0,103: entre las personas que sufrieron un delito se observa un desplazamiento relativo hacia valores más punitivos, aunque de magnitud moderada. La dirección se aprecia mejor en las familias específicas: la victimización total se relaciona con una menor elección de prevención social ($V = 0,109$) y, con menor intensidad, con una mayor elección de endurecimiento penal ($V = 0,060$).

Para analizar conjuntamente la distribución entre las distintas familias de soluciones se reestimó una regresión logística multinomial con el mismo conjunto de controles y la zona de residencia. El orden de los aportes se mantiene: la ocupación es el factor que más agrega al ajuste;

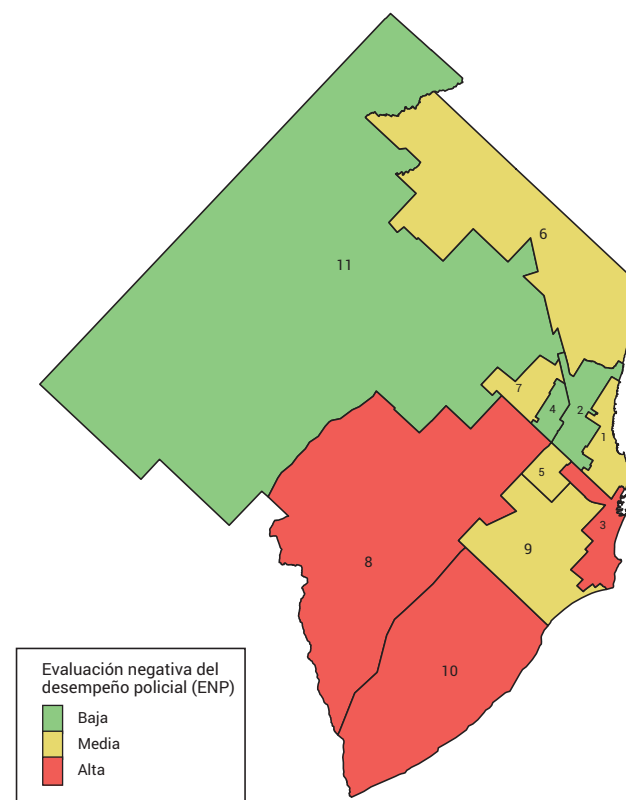
la zona ocupa un segundo nivel y educación, edad, vivienda, sexo y convivencia con hijos aportan diferencias menores. Incorporar victimización total produce una mejora adicional acotada del ajuste. En términos generales, las diferencias sociales entre familias de soluciones son mayores que las relacionadas con la victimización. Esta última modifica la distribución de preferencias, pero no produce un desplazamiento generalizado hacia el punitivismo.

Los contrastes entre prevención social o endurecimiento penal y el resto de las alternativas se examinaron mediante modelos logísticos binarios. La ocupación es el principal factor de diferenciación: entre empleados públicos, la probabilidad ajustada de priorizar prevención social es 48,0% y la de endurecimiento penal 16,0%; entre empresarios, 14,2% y 38,2%; y entre amas de casa, 17,4% y 50,8%, respectivamente. Los empleados privados presentan una distribución prácticamente equilibrada (26,4% social y 27,0% punitiva) y los cuentapropistas también (24,2% y 27,9%). El sexo y la educación agregan diferencias secundarias, sin configurar preferencias ideológicas cerradas.

El BOPPS sintetiza el contraste entre orientación punitiva y prevención social en una escala de -1, 0 y +1. En el análisis bivariado, la ocupación presenta $\eta^2 = 0,062$, la educación 0,015 y la zona 0,007. El modelo lineal principal con los siete controles alcanza un R^2 de 0,086. Los valores ajustados por ocupación muestran una marcada heterogeneidad: amas de casa (+0,335) y empresarios (+0,234) se ubican más cerca del polo punitivo; cuentapropistas (+0,037) y empleados privados (+0,006) quedan cerca del equilibrio; desocupados (-0,068) y jubilados (-0,103) se desplazan hacia el polo social-preventivo, y los valores más cercanos a ese extremo corresponden a estudiantes (-0,294) y empleados públicos (-0,322).

La victimización total modifica el BOPPS, pero su aporte es pequeño. En el análisis bivariado, el promedio pasa de -0,149 entre quienes no registran victimización a

Mapa 9. Evaluación negativa del desempeño policial (ENP) por zona. General Pueyrredon, 2026



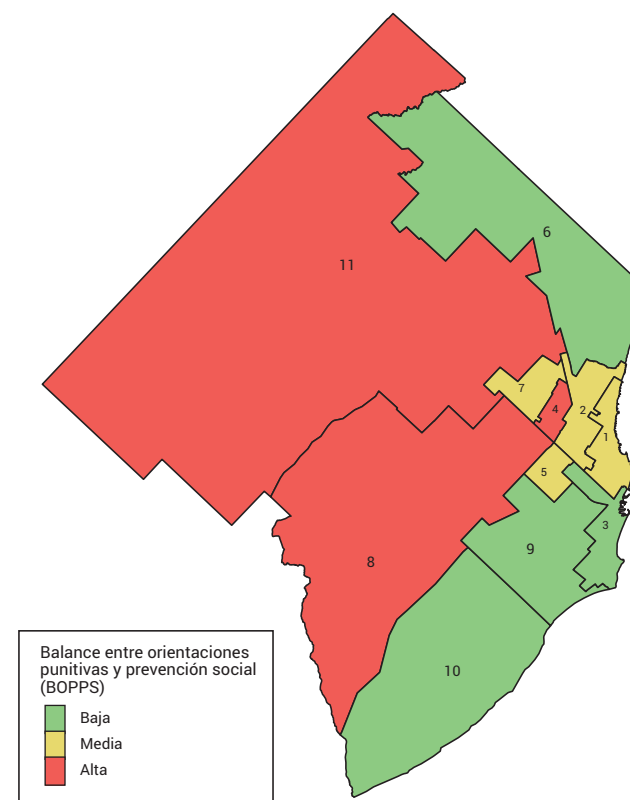
Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

+0,006 entre quienes sí la registran. Los valores ajustados son $-0,134$ y $-0,022$. El R^2 pasa de 0,086 con los siete controles a 0,091 al incorporar victimización total, mientras que victimización por sí sola alcanza 0,010. La probabilidad de priorizar prevención social es menor entre quienes registran victimización y la de endurecimiento penal aumenta en menor medida. En modelos separados, las cuatro modalidades muestran desplazamientos del BOPPS en la misma dirección general observada antes; el patrón se explica principalmente por una menor elección de prevención social, más que por un aumento equivalente del endurecimiento penal. En el modelo conjunto del BOPPS, el R^2 pasa de 0,090 con los siete controles a 0,095 al agregar victimización y a 0,137 al incorporar conjuntamente victimización, IPS e IAP; una vez incluidos estos índices, el coeficiente propio de victimización es prácticamente nulo.

La diferenciación territorial del BOPPS es pequeña en términos de η^2 , estimada sin ponderar, aunque los descriptivos ponderados muestran posiciones distintas. El promedio varía entre $-0,166$ en la Zona 10, el extremo más social-preventivo, y $+0,200$ en la Zona 4, el extremo más punitivo. La primera combina bajo endurecimiento penal con una prioridad elevada a la presencia policial; la segunda presenta 44,0% de elecciones de endurecimiento penal frente a 24,0% de prevención social. El territorio diferencia así combinaciones de soluciones más que un continuo político único.

El Mapa 10 muestra una diferenciación social débil del BOPPS. El polo más punitivo –zonas 4, 8 y 11– presenta una proporción mediana menor de población con educación superior completa que el polo más social-preventivo –zonas 3, 6, 9 y 10– (6,9% frente a 11,4%) y una proporción mediana algo mayor de hogares con NBI (6,6% frente a 5,6%). Las diferencias de edad, escolarización media y desocupación son pequeñas, y ambos polos incluyen territorios urbanos, periféricos y rurales o rururbanos. No aparece, por lo tanto, un gradiente social robusto del punitivismo: las orientaciones de política conservan una autonomía importante respecto de la composición social de las zonas.

Mapa 10. Balance entre orientaciones punitivas y prevención social (BOPPS) por zona. General Pueyrredon, 2026



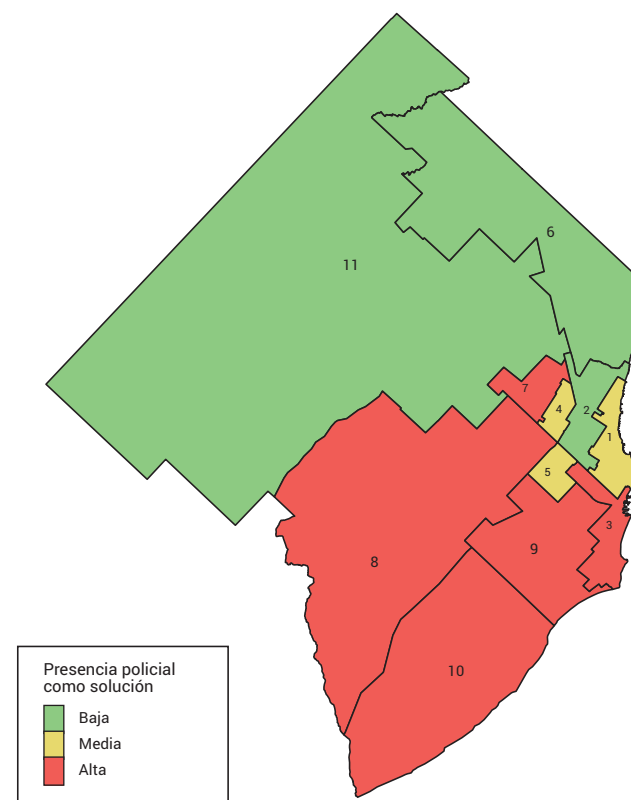
Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

En el Mapa 11, la mayor prioridad otorgada a aumentar la presencia policial –zonas 3, 7, 8, 9 y 10– tampoco define un polo socialmente uniforme. Frente al polo bajo –zonas 2, 6 y 11– presenta algo menos de escolarización (8,53 frente a 9,11 años), menor proporción de población con educación superior completa (7,9% frente a 12,8%) y mayor desocupación (9,6% frente a 8,6%). El polo alto reúne áreas urbanas, periféricas y rurales o rururbanas. La demanda de presencia policial atraviesa, por consiguiente, composiciones sociales diversas y no puede interpretarse como expresión directa de una posición socioeconómica determinada.

La comisaría aporta una lectura territorial más detallada. En relaciones bivariadas no ponderadas, V de Cramer es 0,170 para confianza en fuerzas federales, 0,133 para Patrulla Municipal, 0,135 para Policía Bonaerense, 0,134 para Poder Judicial y 0,152 para evaluación policial. En las soluciones, V es 0,114 para las categorías recodificadas y 0,113 para las familias conceptuales. Estas diferencias son de magnitud reducida a moderada y describen características de las personas residentes en cada jurisdicción.

La distribución por comisaría muestra un contraste especialmente marcado entre la comisaría N° 14 y las comisarías 13 y 15. La comisaría N° 14 se ubica entre las jurisdicciones con valoraciones institucionales más favorables en prácticamente todos los indicadores: presenta 80,1% de confianza en las fuerzas federales, 33,6% en la Patrulla Municipal, 34,6% en la Policía Bonaerense, 23,6% en el Poder Judicial y 32,7% de evaluación positiva del control policial. En el extremo opuesto, la comisaría N° 13 registra 34,2%, 6,4%, 9,9%, 10,2% y 4,1%, respectivamente; la comisaría N° 15 presenta también niveles comparativamente bajos, de 40,7%, 11,4%, 18,7%, 6,7% y 7,4%. Estas diferencias describen las evaluaciones de quienes residen en cada jurisdicción y no deben interpretarse como indicadores del desempeño de las comisarías respectivas.

Mapa 11. Presencia policial como solución por zona.
General Pueyrredon, 2026



Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon, INHUS-MDPET 2026.

El patrón territorial refuerza una distinción importante: la localización residencial aporta más información a algunas evaluaciones institucionales y, sobre todo, a la conflictividad barrial que a la selección de orientaciones generales de política. Zona y comisaría deben entenderse como dos formas alternativas y complementarias de describir las diferencias territoriales, no como evidencia de efectos causales de una jurisdicción determinada.

3.5. Síntesis

Las fuerzas federales son la única categoría con mayoría de confianza. La Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense y el Poder Judicial concentran mayorías claras de desconfianza, y el 79,0% evalúa negativamente el control del delito por la Policía Bonaerense. Las soluciones tampoco se concentran en una sola orientación: prevención social (28,4%) y endurecimiento penal (27,4%) permanecen prácticamente equilibrados, mientras que las reformas institucionales (20,0%) y el fortalecimiento policial (15,7%) también reciben apoyos relevantes.

La coexistencia entre crítica institucional y demanda de intervención estatal no constituye necesariamente una incoherencia: puede expresar reclamos de mayor eficacia, reforma, control o capacidad estatal.

Haber sufrido alguno de los delitos relevados refuerza de manera selectiva el diagnóstico institucional. La victimización total se relaciona con una evaluación más negativa del control policial, aunque su vínculo con la confianza varía entre instituciones. El robo con violencia presenta la diferencia más clara en la evaluación negativa del control policial; las amenazas muestran una relación semejante con esa evaluación y una diferencia algo mayor en la desconfianza hacia la Policía Bonaerense. El robo sin violencia o hurto presenta una relación más moderada, mientras que las lesiones agregan poco una vez considerada su superposición con otros hechos.

Las preferencias de política pública presentan una autonomía relativa mayor. La victimización total incrementa poco el R^2 del BOPPS y no produce un desplazamiento uniforme hacia el endurecimiento penal. La percepción de inseguridad aporta información adicional –especialmente a través del IPS–, pero tampoco agota la estructura de las preferencias. La ocupación es el principal factor observado y la educación agrega diferencias. Este patrón es compatible con la existencia de orientaciones políticas o normativas más generales acerca de las causas del delito, el papel del castigo, la prevención social y las responsabilidades del Estado, aspectos que el cuestionario actual no midió directamente.

El análisis territorial agrega un matiz central: el diagnóstico institucional crítico es generalizado, pero no uniforme. La lectura por polos muestra que la ENP alta reúne zonas socialmente heterogéneas y se diferencia más por ciertos rasgos territoriales –menor densidad mediana y mayor déficit de acceso domiciliario a Internet– que por un gradiente educativo. El BOPPS presenta una polarización social todavía más débil: las zonas más punitivas tienen, en mediana, menor presencia de educación superior, pero las diferencias restantes son pequeñas y los perfiles territoriales diversos. La mayor prioridad por presencia policial tampoco se concentra en un tipo social único. En conjunto, las evaluaciones institucionales y, especialmente, las preferencias de política conservan una autonomía considerable respecto de la composición social de las zonas. La desagregación por comisaría muestra contrastes locales algo más visibles, sin autorizar interpretaciones causales.

Como agenda para futuros relevamientos, será útil profundizar el análisis de la relación entre confianza, evaluación y preferencias de política e incorporar variables no incluidas en el instrumento actual. En particular, una medida breve de orientación ideológica, identificación política o concepciones sobre las causas del delito y el papel del Estado permitiría evaluar si las preferencias sobre soluciones responden a marcos políticos y normativos relativamente autónomos de la victimización y de la inseguridad subjetiva. También resultaría útil relevar experiencias de contacto institucional y características más precisas del contexto de los hechos.

CONCLUSIONES

La encuesta describe una percepción de seguridad ciudadana marcada por una victimización declarada elevada, una inseguridad subjetiva muy extendida y una relación crítica con las instituciones del sistema penal, junto con diferencias entre tipos de delitos, prácticas, grupos sociales y territorios. Dado el carácter transversal, voluntario y no probabilístico del relevamiento, estas diferencias se interpretan como asociaciones y perfiles, no como determinantes causales.

Durante el año previo a la encuesta, el 44,4% declaró haber sufrido al menos una de las cuatro modalidades personales consideradas. Los robos y hurtos alcanzan conjuntamente al 35,6% y la violencia interpersonal al 20,4%. Las asociaciones con las características sociales y residenciales son, en general, débiles y varían según la modalidad: los robos se diferencian relativamente más por sexo, edades intermedias, educación y ocupación; la violencia interpersonal, por edades jóvenes, situación ocupacional y convivencia con hijos. El 46,7% de las víctimas comunicó al menos uno de los hechos, con mayor cantidad de denuncias en los robos y menor en lesiones y amenazas.

La inseguridad subjetiva está todavía más extendida: el 96,5% considera la inseguridad grave o muy grave y el 88,8% percibe que la delincuencia aumentó. El IPS y el IAP muestran que esa preocupación se traduce de manera desigual en sensaciones situadas y cambios de la vida cotidiana. La protección residencial depende sobre todo del tipo de vivienda, mientras que el ICB es el resultado en el que el territorio aporta más información después de los controles.

En el plano institucional, las fuerzas federales son la única categoría con mayoría de confianza (55,1%). La confianza es mucho menor en la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense y el Poder Judicial, y el 79,0% evalúa negativamente el control del delito por la policía provincial. Las preferencias de política están diversificadas: prevención social y endurecimiento penal se encuentran prácticamente equilibrados, junto con apoyos relevantes a la reforma institucional y al fortalecimiento policial. La crítica institucional, por lo tanto, convive con una demanda persistente de intervención estatal.

La incorporación de información censal precisa el alcance de las diferencias territoriales. La composición social de las zonas se relaciona con mayor claridad con la conflictividad barrial y algunas formas específicas de violencia que con la victimización total. Las zonas con mayor desocupación y menor nivel educativo presentan ICB más altos, y las lesiones se concentran relativamente más en territorios jóvenes y con mayores carencias. La victimización total, en cambio, no sigue un gradiente socio-territorial simple.

La inseguridad subjetiva, la evaluación policial y las preferencias de política presentan configuraciones territoriales aún menos lineales. Las características sociodemográficas ayudan a contextualizar algunas diferencias del IPS y el IAP, pero no las explican por sí solas; el BOPPS y la prioridad otorgada a la presencia policial muestran una autonomía mayor respecto de la edad, la educación, la privación o la densidad. Experiencia del delito, inseguridad subjetiva, conflictividad del entorno, evaluación institucional y preferencias de política pública son, por lo tanto, dimensiones relacionadas pero no intercambiables.

El análisis conjunto permite destacar un hallazgo central: la victimización total se relaciona con fuerza con la inseguridad subjetiva y los cambios de la vida cotidiana, de manera más selectiva con la evaluación policial y mucho menos con las preferencias de política. Incorporarla incrementa el R^2 en 0,043 para el IPS y 0,077 para el IAP; en la ENP agrega un aporte menor, y en el BOPPS la mejora es de alrededor de 0,005. Una vez incorporados IPS e IAP, el aporte propio de la victimización al BOPPS es prácticamente nulo. La experiencia delictiva tiene así consecuencias claras en percepciones y prácticas, pero su traducción hacia las orientaciones de política es mucho más débil.

En perspectiva, la victimización total de EPS INHUS-MDPET 2026 (44,4%) se encuentra próxima al 43,3% registrado por la Encuesta de Percepción Ciudadana de MDPET de 2015 y al 38% informado por la Encuesta de Victimización de ACUMARA (Asociación Civil Unión de Monotributistas y Autónomos de la República Argentina) en 2020, y por encima del 21,9% de la Encuesta Nacional de Victimización 2017 para la provincia de Buenos Aires. Estas comparaciones deben leerse con cautela por las diferencias de diseño e instrumento; la ENV 2017 constituye la referencia metodológica más sólida por su carácter probabilístico, mientras que los antecedentes locales permiten contextualizar la persistencia de niveles elevados de delito declarado.

Los antecedentes también muestran la persistencia de una inseguridad subjetiva elevada y espacialmente diferenciada. EPS INHUS-MDPET 2026 profundiza ese componente situacional: la inseguridad es menor en la vivienda y aumenta al caminar cerca del domicilio, en plazas y parques y, especialmente, en situaciones de espera y circulación. Las restricciones de la vida cotidiana y la protección residencial aparecen asimismo más extendidas que en la ENV 2017, aunque las diferencias entre instrumentos impiden tratarlas como una serie temporal homogénea.

Las comparaciones institucionales conservan una jerarquía conocida: las fuerzas federales reciben mejores valoraciones que la policía provincial y el Poder Judicial. En 2026, sin embargo, la confianza en la Policía Bonaerense y el Poder Judicial y la evaluación positiva del control policial son especialmente bajas. En las preferencias sobre soluciones, el contraste con la EPC 2015 sugiere un escenario actual más diversificado, sin una orientación que concentre por sí sola la mayoría de las respuestas.

La realización del estudio adquiere una importancia adicional por el tiempo transcurrido desde los principales relevamientos locales comparables. Un relevamiento aislado ofrece una fotografía; su repetición periódica permitiría reconocer continuidades y cambios, evaluar intervenciones y construir una base acumulativa de conocimiento sobre la seguridad en el partido.

Los resultados muestran, además, que la seguridad no puede abordarse a partir de una única fuente de información. Una política pública sostenida requiere articular estadísticas policiales y judiciales, encuestas de victimización, información territorial, evaluación de las instituciones y conocimiento sobre las experiencias de la población. Convertir esas fuentes en un recurso estable para la toma de decisiones exige compromisos que exceden a una gestión u organismo particular.

En ese marco, la participación de la UNMDP y del CONICET trasciende este informe. La contribución del sistema científico no consiste en reemplazar las responsabilidades de los organismos encargados de gobernar la seguridad, sino en aportar herramientas para comprender los problemas, evaluar críticamente la evidencia y ampliar las bases de las decisiones públicas. La cooperación entre el INHUS y la Red Mar del Plata Entre Todos – Monitoreo Ciudadano constituye, en ese sentido, una experiencia de producción y transferencia de conocimiento que sería deseable sostener y profundizar.

FUENTES Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

- Asociación Civil Unión de Monotributistas y Autónomos de la República Argentina (ACUMARA). (2020). Encuesta de victimización: Partido de General Pueyrredon. ACUMARA.
- Bombini, G., Lohiol, G. J., López Arestín, D., & Lorenc Valcarce, F. (2024). Seguridad ciudadana: Análisis de la problemática para comprender la principal preocupación de los ciudadanos. Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/209>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2024). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022: Resultados definitivos. INDEC. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) & Ministerio de Seguridad de la Nación. (2018). Encuesta Nacional de Victimización 2017. INDEC. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-27-137>
- Mar del Plata Entre Todos. (2016). Primer Informe de Monitoreo Ciudadano: Seguridad ciudadana. Red Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/183>
- Mar del Plata Entre Todos. (2018). Segundo Informe de Monitoreo Ciudadano: Seguridad ciudadana. Red Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/203>
- Mar del Plata Entre Todos. (2020). Información georreferenciada de Mar del Plata. Red Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/14>
- Mar del Plata Entre Todos, Santamaria, G., Pérez Águila, M., Foutel, M., & Alberti, D. (2023). ¿Cuáles son los temas que te preocupan de la ciudad? Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/164>
- Municipalidad de General Pueyrredon. (s. f.). Barrios. Mapa Digital del Municipio de General Pueyrredon. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de https://apps.mardelplata.gob.ar/apps/mapa_digital/mapadigital.php?subrubro=15
- Municipalidad de General Pueyrredon. (s. f.). Jurisdicciones. Mapa Digital del Municipio de General Pueyrredon. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de https://apps.mardelplata.gob.ar/apps/mapa_digital/mapadigital.php?subrubro=122
- Poblaciones. (s. f.). Poblaciones: Plataforma abierta de datos espaciales de la Argentina. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de <https://poblaciones.org/>
- Rodríguez, G., & De Grande, P. (2022). Cartografía de departamentos y comunas del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Poblaciones: Plataforma abierta de datos espaciales de la Argentina. <https://mapa.poblaciones.org/services/metadata/GetMetadataPdf?m=17>
- Sabuda, F. G. (2023). Homologación de zonificaciones. Mar del Plata Entre Todos. <https://mardelplataentretodos.org/repositorio/items/show/219>

ANEXO METODOLÓGICO

Este anexo presenta los principales criterios metodológicos utilizados para diseñar, relevar y analizar la Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026. Explica las decisiones adoptadas sobre la modalidad de administración, la composición y cobertura de la muestra, los procedimientos de ponderación, la construcción de indicadores y las estrategias de análisis estadístico. También examina las particularidades de la medición de la victimización, los posibles mecanismos de selección asociados con una encuesta online autoadministrada y la consistencia de los resultados mediante comparaciones con parámetros poblacionales, relevamientos locales previos y registros administrativos. El propósito es ofrecer los elementos necesarios para precisar el alcance de las estimaciones y valorar conjuntamente las fortalezas y limitaciones de la evidencia producida.

Diseño metodológico y trabajo de campo

El diseño metodológico buscó combinar una cobertura territorial amplia con información de buena calidad. Para ello se implementó un cuestionario estructurado y autoadministrado mediante una plataforma en línea, acompañado por una estrategia de difusión territorial especialmente orientada a alcanzar sectores sociales y barrios con distintos niveles de integración digital. Esta modalidad permitió reunir una base amplia y heterogénea, cuya composición fue evaluada posteriormente mediante procedimientos de depuración, control de consistencia, ponderación y análisis de sensibilidad.

Un cuestionario autoadministrado presenta ventajas y desafíos específicos. Entre los principales desafíos se encuentran el acceso a dispositivos con conexión a Internet y la disposición de las personas para participar voluntariamente, factores que pueden influir en la composición de la muestra. Entre sus ventajas se encuentran la ausencia de entrevistador y la estandarización de la carga, aspectos que se desarrollan a continuación.

La modalidad online autoadministrada no es sólo un soporte técnico de recolección: puede influir en quiénes participan y en el modo en que responden. En este relevamiento pueden distinguirse al menos dos mecanismos de selección. El primero es el acceso y la familiaridad digital: participar requiere disponer de un dispositivo conectado y manejar con comodidad un formulario en línea. Este mecanismo es compatible con la sobrerrepresentación observada de personas con niveles educativos altos. El segundo es una posible autoselección temática: al tratarse de

una convocatoria voluntaria explícitamente vinculada con la seguridad, es plausible que quienes habían sufrido hechos delictivos recientemente, estaban especialmente preocupados por el problema o tenían mayor interés en expresar una evaluación institucional mostraran una mayor disposición a responder. Esta hipótesis es importante para interpretar la escala absoluta de algunas prevalencias, aunque no puede medirse directamente con la información disponible.

La modalidad también ofrece ventajas. La ausencia de entrevistador permite responder en el momento y contexto elegidos por cada participante, reduce los efectos de la interacción interpersonal y puede disminuir ciertas presiones de deseabilidad social. Esto es especialmente pertinente en preguntas sobre experiencias de victimización, prácticas de autoprotección, presencia de armas o evaluaciones críticas de instituciones. La plataforma permitió además incorporar controles de carga y mantener una redacción idéntica para todas las personas, evitando variaciones derivadas de la lectura o explicación de las preguntas por parte de entrevistadores.

La estrategia de difusión buscó compensar parcialmente los mecanismos de selección propios del formato online mediante una circulación por diversos canales y dirigida territorialmente. La convocatoria no se concentró en un único medio o red social: combinó redes institucionales, medios periodísticos, grupos vecinales, páginas barriales, sociedades de fomento, organizaciones comunitarias, organizaciones políticas y redes personales. El seguimiento durante el trabajo de campo permitió reforzar la difusión en zonas con menor participación. Este procedimiento no convierte la muestra en probabilística, pero amplía la diversidad de los canales de entrada y constituye una fortaleza para un relevamiento local que busca combinar volumen de casos, cobertura espacial y diversidad social.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026. Durante ese período el cuestionario permaneció disponible para la población de 18 años o más residente en el Partido de General Pueyrredon y se realizaron tareas permanentes de seguimiento de la participación y de la distribución territorial de los casos.

La difusión se organizó de manera progresiva en tres etapas complementarias. En una primera etapa, el cuestionario circuló a través de la red institucional de Mar del Plata Entre Todos y fue difundido por medios periodísticos locales y portales de noticias. Posteriormente, la estrategia se amplió mediante grupos vecinales y páginas de Facebook correspondientes a distintos barrios. Finalmente, a partir del monitoreo territorial, se reforzó la difusión en sectores con menor participación mediante redes personales e institucionales con presencia barrial, particularmente sociedades de fomento, organizaciones comunitarias y organizaciones políticas. Esta secuencia permitió diversificar los canales de circulación, aunque no eliminó por completo las diferencias en la intensidad de reclutamiento entre áreas y grupos sociales.

La base analítica definitiva utilizada en este informe está integrada por 1.470 respuestas correspondientes a personas de 18 años o más residentes en el Partido de General Pueyrredon, luego de aplicar los criterios de depuración establecidos para garantizar la consistencia de la información y la correcta identificación territorial. Sobre esta base se construyeron las variables derivadas, los índices sintéticos y las recodificaciones empleadas en los distintos análisis.

Composición de la muestra y cobertura territorial

La comparación con la estructura poblacional permite identificar tanto correspondencias satisfactorias como diferencias de composición que deben ser consideradas en el análisis. La muestra reproduce con gran proximidad la distribución por sexo y presenta una cobertura amplia de los distintos grupos etarios y territoriales. Las principales diferencias se concentran en la menor participación de los adultos jóvenes, la mayor presencia relativa de las personas de 45 a 64 años, el nivel educativo y algunas unidades territoriales específicas. Las desviaciones no son, por lo tanto, uniformes en todas las dimensiones de la muestra, sino que se encuentran claramente localizadas y pueden ser tratadas mediante ponderaciones y análisis de sensibilidad. La reconstrucción territorial con datos del Censo 2022 permite, además, comparar la distribución de los 1.470 casos con parámetros poblacionales para las once zonas del estudio y para las quince jurisdicciones policiales.

La composición por edad presenta diferencias más visibles, concentradas en algunos grupos específicos. Las personas de 18 a 24 años representan el 5,9% de la muestra frente a aproximadamente 13,0% de la población adulta, y las de 25 a 34 años, 14,5% frente a 18,1%. En sentido inverso, la principal concentración se produce entre los 45 y 64 años: el grupo de 45 a 54 años reúne el 25,7% de la muestra frente a aproximadamente 16,3% de la población (+9,4 puntos), y el de 55 a 64 años el 19,7% frente a 13,8% (+5,9 puntos). En conjunto, las edades de 45 a 64 años representan el 45,4% de la muestra y alrededor del 30,1% de la población adulta. El grupo de 65 años y más vuelve a estar subrepresentado, con 12,9% frente a aproximadamente 20,4%. La desviación etaria no adopta, por lo tanto, la forma de un envejecimiento general de la muestra, sino de una concentración específica en las edades intermedias-altas.

La principal diferencia de composición respecto de los parámetros poblacionales corresponde al nivel educativo. En la muestra, el 57,3% posee educación superior completa y otro 23,2% educación superior incompleta, mientras que la presencia de personas con nivel primario o secundario incompleto es muy reducida. La referencia censal disponible no corresponde exactamente al mismo universo –comprende a la población de 14 años y más que asistió a un establecimiento educativo–, por lo que la comparación debe considerarse aproximada. Aun con esta salvedad, la

magnitud de las diferencias permite afirmar que existe una fuerte sobrerrepresentación de la población con estudios universitarios o terciarios y una marcada subrepresentación de los niveles educativos bajos.

La disponibilidad de nuevos parámetros territoriales basados en el Censo 2022 permite realizar la comparación para las once zonas utilizadas en este informe, que corresponden a la zonificación realizada por MDPET en 2023:

Cuadro A1. Población por zonas y representación en la muestra

Zona	Denominación territorial	Población	% población	% muestra
1	Centro-La Perla-Playa Grande	153.869	23,29%	31,56%
2	Los Pinares-Constitución-Villa Primera	127.637	19,32%	23,54%
3	Puerto-Punta Mogotes-Faro	65.890	9,98%	9,86%
4	Malvinas Argentinas-Las Lilas-Regional	43.803	6,63%	2,72%
5	Las Heras-Fortunato de la Plaza-El Martillo	45.131	6,83%	5,17%
6	Parque Camet-Las Dalias-Estación Camet	32.283	4,89%	5,99%
7	Libertad-Jorge Newbery-Ameghino	46.675	7,07%	3,67%
8	Batán-Las Américas-José Hernández	44.327	6,71%	2,72%
9	San Martín-Bosque P. Ramos-Acantilados	85.556	12,95%	9,32%
10	Chapadmalal-Los Lobos-El Marquesado	4.668	0,71%	1,36%
11	Sierra de los Padres-La Peregrina	10.730	1,62%	4,08%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC) y Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

Las poblaciones de las once zonas se estimaron a partir de los radios censales del Censo 2022. Cada radio fue asignado íntegramente a la zona con la que presenta la mayor superposición espacial. Dado que las geometrías de las zonas y los radios no coinciden de manera perfecta, se realizaron análisis de sensibilidad mediante asignación por punto interior y prorrateo por superficie; las diferencias entre procedimientos fueron muy reducidas. Las zonas 1 y 2 reúnen 55,1% de la muestra frente a 42,6% de la población de referencia. La Zona 1 constituye la principal sobrerrepresentación en términos absolutos (31,6% de la muestra frente a 23,3% de la población; índice 1,36), seguida por la Zona 2 (23,5% frente a 19,3%; índice 1,22). Las zonas 4 y 8 son las más subrepresentadas (índice 0,41 en ambos casos), y la Zona 7 también presenta un déficit importante (0,52). Las zonas 10 y 11 están sobrerrepresentadas en términos relativos, aunque corresponden a unidades poblacionalmente pequeñas. La Zona 3 reproduce casi exactamente su peso poblacional. En conjunto, la cobertura territorial es completa, pero no proporcional, lo que justifica la corrección territorial en la ponderación descriptiva.

La encuesta obtuvo respuestas en una amplia diversidad de barrios, localidades y parajes. La falta de proporcionalidad no responde a una oposición simple entre centro y periferia: junto con la sobrerrepresentación de las zonas 1 y 2, también las zonas 10 y 11 se encuentran sobrerrepresentadas, mientras que 4, 7, 8 y 9 presentan déficits de distinta magnitud. Las once zonas se mantienen en los análisis; la ponderación territorial corrige la composición de los descriptivos y no funciona como criterio de exclusión.

La muestra comprende residentes de las quince jurisdicciones policiales territoriales utilizadas en el estudio, con cantidades que oscilan entre 15 y 210 casos. La reconstrucción espacial realizada con los radios censales y los polígonos de jurisdicción permite disponer de una población de referencia para cada comisaría, con cierre sobre las mismas 660.569 personas en viviendas particulares. Esto permite evaluar, además de la cobertura, la sobrerrepresentación o subrepresentación relativa de cada jurisdicción.

Cuadro A2. Población por comisarías y representación en la muestra

Comisaría	Población 2022	% población	% muestra
Comisaría 1	55.661	8,43%	14,29%
Comisaría 2	30.109	4,56%	9,73%

Comisaría 3	22.229	3,37%	4,29%
Comisaría 4	65.346	9,89%	7,76%
Comisaría 5	89.854	13,60%	10,61%
Comisaría 6	84.691	12,82%	6,73%
Comisaría 7	63.589	9,63%	13,06%
Comisaría 8	36.952	5,59%	1,84%
Comisaría 9	45.245	6,85%	8,23%
Comisaría 11	31.762	4,81%	1,02%
Comisaría 12	34.660	5,25%	3,67%
Comisaría 13	25.223	3,82%	4,29%
Comisaría 14	10.126	1,53%	4,08%
Comisaría 15	17.440	2,64%	3,20%
Comisaría 16	47.682	7,22%	7,21%

Fuente: Elaboración propia en base a Municipio de General Pueyrredon, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC) y Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La comparación por jurisdicción policial muestra una correspondencia razonable en una parte importante de las unidades y un conjunto más acotado de desbalances pronunciados. Nueve de las quince comisarías presentan índices de representación comprendidos entre 0,70 y 1,36. La comisaría N° 16 reproduce prácticamente de manera exacta su peso poblacional (índice 1,00), mientras que las comisarías 13 (1,12), 9 (1,20), 15 (1,21), 3 (1,27), 4 y 5 (0,78 en ambos casos) y 7 (1,36) se mantienen relativamente próximas a la proporcionalidad. La comisaría N° 12 presenta una subrepresentación algo mayor (0,70). Las diferencias más marcadas se concentran, en cambio, en las comisarías 1, 2 y 14, sobrerrepresentadas, y 6, 8 y 11, subrepresentadas.

En conjunto, la cobertura territorial es amplia, aunque no proporcional. Los desbalances se concentran en determinadas áreas y justifican los ajustes de ponderación de los descriptivos, sin impedir la comparación analítica de las once zonas y las quince jurisdicciones policiales.

Zonificación y construcción de los indicadores territoriales

El análisis territorial utiliza una división del Partido de General Pueyrredon en once zonas. Esta clasificación procede del trabajo de homologación elaborado por Mar del Plata Entre Todos a partir de dos antecedentes: la zonificación utilizada originalmente por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), limitada principalmente al área urbana de Mar del Plata, y la zonificación del Presupuesto Participativo 2023 del Municipio de General Pueyrredon, que abarca la totalidad del partido. La propuesta buscó conservar la continuidad con las áreas utilizadas en los informes anteriores y, al mismo tiempo, incorporar sectores rurales, rururbanos y localidades menores que quedaban fuera de la delimitación original.

Las dos clasificaciones de partida utilizaban criterios territoriales diferentes. La zonificación de la ICES había sido construida a partir de radios censales, mientras que la del Presupuesto Participativo se apoyaba principalmente en límites barriales. Como radios y barrios no coinciden necesariamente, la homologación no consistió en una simple superposición de ambas divisiones. El procedimiento conservó como referencia los radios censales, subdividió algunas de las zonas anteriores y extendió la cobertura hacia las áreas periféricas del partido. De este modo se conformaron once unidades que incluyen tanto sectores urbanos consolidados como áreas periféricas, localidades y corredores rurales o rururbanos.

Para facilitar la interpretación sustantiva de los resultados, en este informe cada zona se identifica además mediante algunos de los barrios o localidades que mejor permiten reconocerla territorialmente: Zona 1 (Centro–La Perla–Playa Grande); Zona 2 (Los Pinares–Constitución–Villa

Primera); Zona 3 (Puerto–Punta Mogotes–Faro); Zona 4 (Malvinas Argentinas–Las Lilas–Regional); Zona 5 (Las Heras–Fortunato de la Plaza–El Martillo); Zona 6 (Parque Camet–Las Dalias–Estación Camet); Zona 7 (Libertad–Jorge Newbery–Ameghino); Zona 8 (Batán–Las Américas–José Hernández); Zona 9 (San Martín–Bosque Peralta Ramos–Acantilados); Zona 10 (Chapadmalal–Los Lobos–El Marquesado); y Zona 11 (Sierra de los Padres–La Peregrina–Gloria de la Peregrina). Estas denominaciones tienen una función descriptiva: no sustituyen los límites geométricos de las zonas ni implican que cada una se reduzca exclusivamente a los barrios mencionados.

La vinculación con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 se realizó a partir de los radios censales. Cada radio de General Pueyrredon fue asignado a la zona con la que presenta la mayor superposición espacial. Como algunos radios atraviesan límites zonales, el procedimiento se contrastó con alternativas basadas en punto interior y prorrateo por superficie; las diferencias fueron reducidas. La operación permite estimar la población de referencia de cada zona, comparar su peso poblacional con el observado en la muestra e incorporar indicadores censales de población, hogares y viviendas.

Los resultados territoriales de la encuesta se representan además mediante once mapas temáticos correspondientes a la zonas: victimización total, robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones, amenazas, Índice de Percepción de Seguridad (IPS), Índice de Autoprotección Personal (IAP), Índice de Conflicto Barrial (ICB), Evaluación Negativa del Desempeño Policial (ENP), Balance entre Orientación Punitiva y Prevención Social (BOPPS) y elección de una mayor presencia policial como solución frente a la inseguridad. Los valores utilizados son los descriptivos ponderados correspondientes a cada sección: por sexo y edad en los indicadores de victimización, y por sexo, edad, nivel educativo y territorio en los restantes indicadores.

Para facilitar la lectura cartográfica, cada variable se clasificó en tres categorías –baja, media y alta– representadas mediante una escala de verde, amarillo y rojo. Los cortes no corresponden a umbrales externos ni a valores sustantivos definidos a priori. Se establecieron para cada indicador procurando, simultáneamente, una distribución razonablemente equilibrada de las once zonas y evitando separar artificialmente zonas cuyos valores fueran prácticamente iguales. Las categorías expresan, por lo tanto, posiciones relativas dentro de la distribución territorial observada en cada indicador.

Esta precisión es importante porque el contraste visual de los mapas puede producir una impresión de diferencias mayores que las que efectivamente existen entre algunas zonas. El cuadro siguiente presenta los rangos reales de valores incluidos en cada categoría.

Cuadro A3. Rangos observados de las categorías utilizadas en los mapas por zona

Indicador	Baja – verde	Media – amarillo	Alta – rojo
Victimización total	36,7–38,9% (2)	44,0–46,4% (4)	48,2–52,1% (5)
Robo con violencia	6,8–16,4% (4)	18,9–22,0% (5)	24,2–24,8% (2)
Robo sin violencia o hurto	15,3–18,1% (2)	23,5–25,3% (4)	29,8–37,4% (5)
Lesiones	0,0–3,2% (2)	6,1–8,3% (5)	9,6–15,9% (4)
Amenazas	12,8–16,1% (5)	18,0–20,7% (4)	24,2–31,2% (2)
IPS	0,514–0,654 (3)	0,673–0,712 (4)	0,724–0,771 (4)
IAP	0,366–0,563 (4)	0,587–0,628 (4)	0,655–0,690 (3)
ICB	0,596–0,606 (3)	0,677–0,744 (3)	0,799–0,976 (5)
ENP	0,615–0,729 (3)	0,736–0,758 (5)	0,770–0,832 (3)
BOPPS	-0,166 a -0,087 (4)	-0,037 a +0,047 (4)	+0,109 a +0,200 (3)
Presencia policial como solución	2,6–13,8% (3)	16,1–16,3% (3)	18,8–29,5% (5)

Nota: entre paréntesis se indica el número de zonas comprendidas en cada categoría. Las categorías baja, media y alta son relativas a la distribución de cada indicador entre las once zonas y no representan umbrales absolutos. En BOPPS, los valores más bajos indican una mayor orientación hacia la prevención social y los más altos una mayor orientación punitiva. En ENP, los valores más altos expresan una evaluación más negativa del desempeño policial. En los mapas de victimización, las zonas corresponden al lugar de residencia de las personas encuestadas y no necesariamente al lugar donde ocurrió el hecho declarado.

Fuente: Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

La lectura conjunta de los mapas debe atender, por lo tanto, tanto a la posición relativa de cada zona como a la magnitud de las diferencias. En algunos indicadores –por ejemplo, victimización total, IPS o ENP– las posiciones territoriales se distribuyen dentro de intervalos relativamente acotados. En otros, como lesiones, amenazas, ICB o elección de una mayor presencia policial, aparecen contrastes más pronunciados. El semáforo constituye así un recurso de síntesis cartográfica y comparación, no una clasificación absoluta de zonas “seguras” e “inseguras”.

Caracterización sociodemográfica de las zonas

La vinculación de las once zonas con los radios censales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 permite complementar la delimitación territorial con información sobre las características sociales de la población residente. Para ello se seleccionó un conjunto acotado de indicadores destinados a captar composición etaria, educación, inserción laboral, condiciones de vida, acceso domiciliario a Internet y densidad poblacional.

La edad se considera mediante dos medidas complementarias: la edad media de la población y el porcentaje de personas de 65 años y más. La primera permite comparar de manera continua el grado relativo de envejecimiento de las zonas, mientras que la segunda identifica específicamente el peso de la población adulta mayor. Ambas variables están estrechamente relacionadas, pero no son equivalentes y pueden utilizarse alternativamente según el tipo de análisis.

La educación también se representa mediante dos indicadores. Por un lado, se utiliza el promedio de años de escolarización, que ofrece una medida continua del nivel educativo acumulado. Por otro, se considera el porcentaje de población con educación superior completa, que identifica la presencia relativa de personas que completaron estudios terciarios, universitarios o de posgrado. La combinación de una medida numérica y otra categórica permite adaptar la descripción a distintos propósitos analíticos sin asumir que ambas captan exactamente el mismo aspecto de la estructura educativa.

Las condiciones sociales se complementan con la tasa de desocupación, el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el porcentaje de hogares sin acceso a Internet en la vivienda. Estos indicadores no deben interpretarse como expresiones intercambiables de una única condición socioeconómica. La desocupación refiere específicamente a la situación de la población económicamente activa, mientras que el NBI identifica carencias estructurales de los hogares y la ausencia de Internet combina disponibilidad de recursos, infraestructura y

condiciones de acceso domiciliario a Internet. Finalmente, la densidad poblacional, calculada como habitantes por kilómetro cuadrado, permite distinguir áreas urbanas compactas de territorios periféricos, rurales o rururbanos.

Cuadro A4. Caracterización sociodemográfica de las once zonas. Censo 2022

Zona	Edad media	65 años y más (%)	Años de escolarización	Superior completa (%)	Desocupación (%)	Hogares con NBI (%)	Hogares sin Internet (%)	Densidad (hab./km ²)
1	43,2	22,3	11,65	25,9	7,9	1,5	11,9	8.705
2	40,2	17,8	10,41	17,2	8,6	2,1	12,0	5.862
3	38,5	15,1	10,01	15,3	9,3	2,5	10,6	3.023
4	37,9	15,9	8,73	6,9	9,9	3,7	19,4	6.148
5	35,0	12,4	8,32	5,9	10,4	6,0	15,0	4.857
6	33,3	9,8	8,55	7,6	9,8	6,6	36,5	198
7	33,7	10,2	7,99	4,5	10,2	6,0	21,1	3.031
8	32,7	9,6	7,66	3,3	9,6	8,3	27,2	163
9	35,0	12,0	8,53	7,9	9,8	5,6	18,2	1.255
10	36,7	12,9	9,51	14,8	7,3	5,6	30,5	30
11	35,5	11,5	9,11	12,8	6,4	6,6	26,6	15
MGP	38,2	15,7	9,69	14,0	9,0	3,5	15,9	452

Fuente: elaboración propia sobre Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC)

Los indicadores muestran diferencias territoriales claras. Las zonas 1, 2 y 3 concentran los valores más altos de edad y educación y los niveles más bajos de privación estructural. La Zona 1 (Centro–La Perla–Playa Grande) constituye el caso más definido: presenta la mayor edad media (43,2 años), el porcentaje más alto de personas de 65 años y más (22,3%), el promedio de escolarización más elevado (11,65 años) y la mayor proporción de población con estudios superiores completos (25,9%). Al mismo tiempo, registra el porcentaje más bajo de hogares con NBI (1,5%) y una proporción reducida de hogares sin Internet (11,9%). Las zonas 2 y 3 presentan el mismo perfil general, aunque con diferencias menos pronunciadas.

La Zona 4 (Malvinas Argentinas–Las Lilas–Regional) ocupa una posición intermedia. Su estructura etaria se aproxima al promedio municipal y presenta una densidad elevada, pero sus indicadores educativos son considerablemente menores que los de las tres primeras zonas: 8,73 años de escolarización y 6,9% de población con educación superior completa. El NBI (3,7%) se sitúa próximo al promedio del partido, mientras que la falta de Internet alcanza 19,4%. Se trata, por lo tanto, de un territorio urbano denso cuya composición social difiere claramente de la observada en las áreas más centrales.

Las zonas 5, 7 y 9 presentan perfiles relativamente jóvenes, niveles de escolarización inferiores al promedio y una mayor presencia de carencias sociales. La Zona 5 combina una edad media de 35 años, 8,32 años de escolarización, 5,9% de educación superior completa y una de las tasas de desocupación más elevadas (10,4%). La Zona 7 muestra valores todavía menores de educación –7,99 años de escolarización y 4,5% con estudios superiores completos– y niveles altos de desocupación, NBI y falta de Internet. La Zona 9 presenta una estructura semejante, aunque menos extrema y con una densidad considerablemente menor.

Las zonas 6 y 8 reúnen las poblaciones más jóvenes y algunos de los indicadores sociales más desfavorables. La Zona 6 tiene una edad media de 33,3 años, 9,8% de población de 65 años y más y 8,55 años de escolarización; además, el 36,5% de los hogares no dispone de Internet, el valor más elevado entre las once zonas. La Zona 8 presenta la menor edad media (32,7 años), el promedio de escolarización más bajo (7,66 años), la menor proporción de población con educación superior completa (3,3%) y el mayor porcentaje de hogares con NBI (8,3%). Ambas poseen densidades muy bajas en comparación con las zonas urbanas consolidadas, lo que refuerza su carácter periférico.

Las zonas 10 y 11 presentan una configuración diferente. Son las unidades de menor densidad –30 y 15 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente– y registran proporciones elevadas de hogares sin Internet, pero sus indicadores educativos no se ubican entre los más bajos. La Zona 10 presenta 9,51 años de escolarización y 14,8% de población con educación superior completa, valores próximos al promedio municipal,

mientras que la Zona 11 alcanza 9,11 años y 12,8%, respectivamente. Ambas muestran además las tasas de desocupación más bajas de las once zonas. Estos rasgos aconsejan distinguirlas de las áreas periféricas urbanas y tratarlas como territorios rururbanos con características propias.

La comparación entre indicadores muestra una fuerte superposición entre composición etaria, educación y condiciones estructurales de los hogares. Las zonas con mayor edad media tienden también a presentar mayores niveles educativos y menor incidencia de NBI, mientras que las más jóvenes concentran, en general, menor escolarización y mayores carencias. Por ello, estas dimensiones se utilizan alternativamente según la pregunta analítica y no se interpretan como factores territoriales independientes.

En términos generales, la información censal permite reconocer cuatro perfiles territoriales de carácter exploratorio: un conjunto urbano consolidado y comparativamente aventajado, formado principalmente por las zonas 1, 2 y 3; una franja urbana popular o intermedia, que comprende las zonas 4, 5, 7 y 9; áreas periféricas jóvenes y con mayores carencias, representadas especialmente por las zonas 6 y 8; y dos territorios rururbanos de muy baja densidad, zonas 10 y 11. Esta agrupación no constituye una nueva zonificación ni una tipología cerrada, sino una síntesis descriptiva de las semejanzas observadas en los indicadores censales. Su utilidad principal es proporcionar un contexto social y territorial para la lectura posterior de los resultados de la encuesta.

Características sociodemográficas y resultados territoriales de la encuesta

Con el propósito de complementar la descripción territorial, los indicadores censales de las once zonas se pusieron en relación con los principales resultados agregados de la encuesta: victimización total y sus cuatro componentes, Índice de Percepción de Seguridad (IPS), Índice de Autoprotección Personal (IAP), Índice de Conflicto Barrial (ICB), Evaluación Negativa del Desempeño Policial (ENP), Balance entre Orientación Punitiva y Prevención Social (BOPPS) y preferencia por una mayor presencia policial.

La unidad de análisis de este ejercicio son las once zonas, por lo que el número de observaciones territoriales es reducido. Las zonas constituyen, además, el universo de unidades de la clasificación utilizada en el informe y no una muestra probabilística de territorios. En consecuencia, el análisis tiene un propósito exclusivamente descriptivo y exploratorio y no se orienta a realizar inferencias estadísticas hacia una población más amplia de unidades territoriales.

Para resumir las relaciones se utilizó el coeficiente rho de Spearman, apropiado para examinar asociaciones monotónicas entre el orden relativo de las zonas sin exigir normalidad ni linealidad. El coeficiente no elimina la fragilidad de trabajar con once unidades; por ello, las asociaciones de mayor interés se sometieron a una prueba descriptiva de sensibilidad leave-one-out, recalculándolas al excluir alternativamente cada zona.

Las relaciones examinadas son ecológicas: vinculan características agregadas de las zonas con resultados agregados de la encuesta. Una asociación entre la desocupación de una zona y su nivel de conflictividad no implica que las personas desocupadas sean quienes perciben mayor conflictividad. Los indicadores censales caracterizan territorios, no individuos.

Cuadro A5. Asociaciones territoriales entre características censales seleccionadas y resultados de la encuesta

Indicador censal	Resultado de la encuesta	ρ de Spearman	Rango leave-one-out
Desocupación	ICB	0,873	0,830 a 0,927
Desocupación	IAP	0,800	0,733 a 0,939
Educación superior completa	ICB	-0,800	-0,842 a -0,733
Años medios de escolarización	ICB	-0,709	-0,794 a -0,673
65 años y más	Lesiones	-0,655	-0,855 a -0,539
Desocupación	IPS	0,627	0,503 a 0,745
Hogares con NBI	Lesiones	0,564	0,418 a 0,758
Densidad poblacional	IPS	0,518	0,370 a 0,794
Edad media	ICB	-0,509	-0,758 a -0,430

Nota: los coeficientes corresponden a las once zonas y tienen un uso exclusivamente descriptivo. El rango leave-one-out indica los valores mínimo y máximo obtenidos al recalcular el coeficiente excluyendo alternativamente una de las once zonas. Fuente: elaboración propia sobre Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC) y Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredon 2026 (INHUS-MDPET).

El patrón más consistente corresponde al Índice de Conflicto Barrial. Las zonas con mayor desocupación presentan valores más altos de ICB, mientras que las zonas con mayor nivel educativo presentan valores más bajos. La relación se observa tanto al medir la educación mediante años medios de escolarización como mediante la proporción de población con estudios superiores completos. Estas asociaciones mantienen su dirección al excluir alternativamente cada zona, lo que indica que no dependen de un único caso extremo.

La victimización total presenta un patrón diferente. Su distribución territorial no muestra asociaciones claras con NBI, densidad o educación. Esto indica que las diferencias de prevalencia entre zonas no reproducen de manera directa la estructura de desigualdad social observada en los datos censales. Algunos componentes específicos sí muestran mayor correspondencia con esa estructura. El caso más claro son las lesiones, relativamente más frecuentes en zonas jóvenes y con mayor incidencia de NBI.

La desocupación aparece asociada no sólo con la conflictividad barrial sino también con el IAP y, en menor medida, con el IPS. Esta regularidad no se reproduce en las preferencias de política. El BOPPS presenta relaciones débiles e inestables con edad, educación, desocupación, NBI y densidad. La información censal permite así distinguir entre dimensiones de la seguridad más estrechamente vinculadas con las condiciones sociales del entorno y otras que presentan mayor autonomía respecto de ellas.

Tampoco se observa la relación inicialmente plausible entre envejecimiento territorial y mayores niveles de inseguridad o punitivismo. Las zonas con mayor edad media o mayor proporción de población de 65 años y más no registran sistemáticamente valores superiores de IPS o BOPPS. El envejecimiento aparece relacionado, en cambio, con menores niveles de lesiones y conflictividad barrial. Estas relaciones territoriales no deben confundirse con las asociaciones individuales entre edad y las mismas variables analizadas en otras secciones del informe.

En conjunto, la lectura integrada muestra que la composición social del territorio contribuye especialmente a contextualizar la conflictividad barrial y algunas formas de violencia, pero posee una capacidad mucho menor para ordenar la prevalencia del delito y las preferencias de política de seguridad. Por ese motivo, los indicadores censales se utilizan en el informe como herramientas de contextualización territorial y no como variables explicativas incorporadas a modelos ecológicos.

Criterios de ponderación y análisis

Los descriptivos de victimización se estiman con una ponderación por sexo y edad. Para inseguridad subjetiva, conflictividad barrial, protección residencial, confianza institucional, evaluación policial y soluciones frente a la inseguridad se utiliza una ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio. El componente territorial toma como referencia la distribución poblacional de las once zonas reconstruida con datos del Censo 2022. Esta corrección responde principalmente a la fuerte sobrerrepresentación de los niveles educativos altos de la muestra y reduce, al mismo tiempo, parte de los desbalances territoriales.

La ponderación debe entenderse como una corrección de la composición de la muestra, no como una transformación de su diseño. Los pesos ajustan diferencias observables entre la muestra y parámetros poblacionales conocidos, pero no pueden corregir automáticamente mecanismos de selección asociados con características no observadas. Ajustar por sexo, edad, educación y territorio mejora la correspondencia sociodemográfica y espacial, pero no elimina una posible mayor propensión a participar entre personas que sufrieron un delito o están especialmente preocupadas por la inseguridad. Por eso, las estimaciones ponderadas se interpretan como aproximaciones descriptivas ajustadas y se complementan con análisis de sensibilidad.

En la ponderación conjunta por sexo, edad, nivel educativo y territorio, los pesos extremos fueron limitados a un rango de 0,50 a 3 y posteriormente normalizados. La decisión busca evitar que un número reducido de observaciones pertenecientes a categorías fuertemente subrepresentadas adquiera una influencia desproporcionada sobre las estimaciones descriptivas ponderadas. Este problema también puede describirse mediante el concepto de tamaño muestral efectivo: aun cuando el número nominal de casos permanezca constante, una gran dispersión de pesos reduce la cantidad de información estadística equivalente de una estimación ponderada. El truncamiento procura, por lo tanto, un equilibrio entre mejorar la correspondencia con la población y evitar una concentración excesiva del peso en pocos casos. Este diagnóstico corresponde exclusivamente a los descriptivos ponderados: no se utiliza para definir los N de los análisis bivariados o multivariados, que se estiman sin ponderar.

La utilización de dos esquemas de ponderación responde a propósitos analíticos distintos. En victimización se privilegia el ajuste por sexo y edad, que modifica menos la estructura original de la muestra y ofrece una referencia estable para la comparación con otras encuestas y registros. En inseguridad subjetiva, conflictividad, protección residencial, confianza y soluciones se incorpora también educación y territorio, dimensiones en las que la composición de la muestra puede afectar de manera más directa las respuestas. Esta elección no supone que una ponderación sea universalmente superior a la otra: se trata de soluciones específicas para preguntas analíticas diferentes, contrastadas mediante variantes alternativas de cálculo.

En las variables ordinales, la interpretación descriptiva se apoya en porcentajes acumulados sustantivamente relevantes –por ejemplo, “inseguro o muy inseguro” o “poco o nada confiable”– y no solamente en la categoría modal. Los resultados descriptivos, incluidos los porcentajes y medias que caracterizan a cada zona, se presentan con las ponderaciones definidas para cada sección: sexo y edad en victimización, y sexo, edad, nivel educativo y territorio en inseguridad subjetiva, conflictividad barrial, protección residencial, confianza, evaluación policial y soluciones. En cambio, todas las medidas de asociación bivariada y los modelos multivariados se estiman sobre la base sin ponderar y, en ellos, los N corresponden a observaciones efectivamente utilizadas. Las once zonas se incluyen e interpretan como unidades territoriales. La robustez sustantiva se evalúa por la convergencia entre descriptivos ponderados, relaciones bivariadas y modelos multivariados.

Para el análisis multivariado se utilizaron distintos modelos según la naturaleza de cada variable dependiente. Los indicadores dicotómicos – como las modalidades de victimización, sentirse inseguro o muy inseguro, adoptar o no una práctica de autoprotección, confianza o desconfianza institucional y evaluación positiva o negativa del desempeño policial– se analizaron mediante regresiones logísticas binarias. Los índices continuos IPS, IAP, ICB y BOPPS, así como la cantidad de recursos de protección residencial, se examinaron mediante regresiones lineales múltiples. La ENP se construye a partir de una única variable ordinal de cuatro categorías –muy buena, buena, mala y muy mala– recodificada linealmente entre 0 y 1 y tratada como variable continua en los modelos; no constituye un índice compuesto. Las familias de soluciones, al constituir categorías sin un orden jerárquico, se analizaron mediante regresión logística multinomial; cuando el interés fue comparar una familia específica frente al resto, se utilizaron regresiones logísticas binarias. El núcleo común de controles comprende sexo, edad, educación agrupada en cuatro niveles, ocupación en ocho categorías –empleo privado, empleo público, cuentapropistas, empresarios, jubilados, desocupados, amas de casa y estudiantes–, convivencia con hijos, tipo de vivienda y zona de residencia. En los análisis bivariados la edad se agrupa en seis categorías: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 y 65 años o más. En los modelos multivariados se utiliza generalmente como variable continua; cuando la forma de la relación lo requiere, se incorpora además un término cuadrático para representar relaciones no lineales, como en los modelos de victimización patrimonial de la sección 1. Los modelos se estimaron con las observaciones disponibles para el conjunto de variables incorporadas en cada especificación. Se excluyen categorías no sustantivas, pero las once zonas se mantienen como categorías territoriales del análisis; cualquier eventual dificultad de estimación se trata, si aparece, como un problema específico del modelo correspondiente y no como una restricción general de una zona.

En los análisis de las secciones 2 y 3 en los que la victimización se incorpora como variable explicativa se utiliza exactamente la misma definición de victimización total que en la sección 1. El indicador vale 1 cuando la persona declaró haber sufrido al menos una de cuatro modalidades personales durante los últimos doce meses –robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones y amenazas–; vale 0 cuando no declaró ninguna y se considera perdido cuando no puede establecerse la condición por falta de información. La comparación de modelos anidados se

realiza siempre sobre el mismo conjunto de observaciones. Como análisis de desagregación, las cuatro modalidades se incorporan en modelos separados y, cuando se indica expresamente, de manera simultánea para evaluar su aporte propio.

Dado el carácter voluntario y no probabilístico de la muestra, el análisis no utiliza umbrales inferenciales convencionales como criterio para establecer la existencia o inexistencia de asociaciones en la población. La interpretación se apoya principalmente en la magnitud de las diferencias, los tamaños de asociación, los valores o probabilidades ajustados y la consistencia entre especificaciones. En los análisis bivariados se utiliza V de Cramer para asociaciones entre variables categóricas, correlación punto-biserial para la relación entre una variable dicotómica y un indicador continuo, y eta cuadrada para la relación entre variables categóricas e indicadores continuos. Todos estos análisis se estiman sin ponderar. V de Cramer expresa magnitud y no dirección; por ello, el sentido de las asociaciones se interpreta a partir de porcentajes, medias o diferencias sustantivas.

Los modelos se emplean principalmente para evaluar si una asociación bivariada permanece al considerar simultáneamente otras características individuales, familiares, residenciales y territoriales. Por ello, el informe privilegia la presentación de probabilidades ajustadas o valores predichos antes que una lectura aislada de coeficientes. En las regresiones logísticas, el pseudo- R^2 de McFadden se utiliza como indicador de ajuste global y no se interpreta como porcentaje de varianza explicada. En las regresiones lineales, en cambio, el R^2 convencional expresa la proporción de variación del resultado asociada al conjunto de predictores. En las comparaciones territoriales complementarias, zona y comisaría se incorporan alternativamente sobre un núcleo de controles no territoriales para estimar el aporte adicional de cada clasificación sin tratarlas como factores causales.

El informe utiliza las once zonas como clasificación territorial principal, junto con la jurisdicción policial como desagregación complementaria. Esta división territorial se adopta como estándar de la Red Mar del Plata Entre Todos. Las once zonas se conservan como unidades analíticas en las comparaciones bivariadas, los modelos multivariados y la interpretación sustantiva, independientemente de su tamaño relativo dentro de la muestra.

La zona y la comisaría se emplean como unidades de localización de las personas encuestadas y no como factores causales. Las diferencias por jurisdicción policial no constituyen una evaluación del desempeño de las comisarías. Además, salvo en los hechos ocurridos en la vivienda, el lugar de residencia no necesariamente coincide con el lugar donde se produjo la victimización declarada. En el análisis territorial se interpretan las once zonas: sus perfiles descriptivos se presentan con la ponderación correspondiente a cada sección, mientras que los análisis bivariados y multivariados utilizan los N observados sin ponderar. El carácter no probabilístico del relevamiento limita el alcance inferencial de los resultados,

pero no impide describir y comparar los perfiles territoriales de las once zonas. Si un modelo particular presentara una dificultad técnica específica de estimación, ésta debe tratarse en ese modelo y no convertirse en una advertencia general sobre la unidad territorial.

Especificidad de la medición de victimización

Las encuestas de victimización producen un tipo de evidencia diferente de los registros policiales, judiciales o administrativos. En este informe, las estimaciones principales son prevalencias: indican qué proporción de personas declaró haber sufrido al menos un hecho durante los doce meses anteriores, y no cuántos episodios ocurrieron en total. Una persona puede haber sufrido más de un episodio de un mismo tipo y continuar contando una sola vez en la prevalencia correspondiente. Esta distinción resulta central para evitar equiparar personas que sufrieron un delito con hechos registrados y para interpretar correctamente las comparaciones con el Sistema Nacional de Información Criminal.

El cuestionario privilegió descripciones conductuales concretas antes que una pregunta general sobre “haber sido víctima de un delito”. El núcleo de victimización individual utilizado en el informe reúne cuatro experiencias personales con una unidad de referencia común: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones y amenazas. El uso de situaciones concretas reduce la dependencia de que las personas conozcan o apliquen correctamente categorías jurídicas, pero no elimina los problemas propios de toda medición retrospectiva. Pueden existir omisiones, diferencias de interpretación, reconstrucciones del episodio o telescopamiento temporal, es decir, inclusión dentro de los últimos doce meses de hechos ocurridos algo antes. El período de referencia, la repetición explícita de ese período y la descripción de conductas específicas buscan reducir esos problemas sin suponer que desaparecen. Por la misma razón, la diferencia entre prevalencias de encuesta y registros administrativos no puede interpretarse por simple resta como una estimación de “cifra negra”: las fuentes miden unidades distintas, tienen procesos de clasificación diferentes y sólo una parte de los hechos declarados ingresa efectivamente al sistema institucional.

La calidad externa de las estimaciones de victimización de EPS INHUS-MDPET 2026 puede evaluarse comparando su distancia respecto de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) con la que presentan otras encuestas de victimización. Esta comparación no supone que encuesta y registro administrativo deban coincidir. Las encuestas contabilizan personas que declaran haber sufrido al menos un hecho, incluyendo aquellos que nunca fueron denunciados, mientras que el SNIC registra hechos que llegaron al conocimiento de las instituciones y fueron clasificados administrativamente. Por ello, una prevalencia de encuesta varias veces superior a la tasa registrada es esperable.

Para establecer una referencia se utilizó la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV), una encuesta probabilística y presencial de alta solidez metodológica. Para cada delito se calculó primero la relación entre la prevalencia estimada por la ENV para la provincia de Buenos Aires y la tasa correspondiente del SNIC 2016. Esa relación constituye el patrón de brecha esperable entre una encuesta de victimización de alta calidad metodológica y el registro oficial. Luego se calculó la misma relación entre cada encuesta local y el SNIC de General Pueyrredon correspondiente a su período. El índice relativo resulta de dividir ambas razones:

$$\text{Índice relativo} = (\text{Encuesta local} / \text{SNIC local}) / (\text{ENV PBA} / \text{SNIC PBA}).$$

Un índice de 1 significa que la distancia entre la encuesta local y el SNIC es igual a la observada entre la ENV y el valor del SNIC para la provincia de Buenos Aires; un índice de 2 indica una distancia dos veces mayor. No debe interpretarse como un “porcentaje de sobreestimación”, porque continúan comparándose personas que sufrieron un delito con hechos registrados y las categorías no son perfectamente equivalentes. Su utilidad consiste en normalizar esa diferencia mediante una referencia oficial construida con el mismo procedimiento.

Para la presente encuesta, INHUS-MDPET 2026, los índices relativos son 1,21 para robo con violencia, 2,21 para robo sin violencia, 1,48 para lesiones y 2,90 para amenazas. La media geométrica de estos cuatro indicadores produce un índice sintético de 1,84. Esto significa que, en términos típicos, la distancia de MDPET respecto del SNIC es aproximadamente el doble de la observada en la ENV. Sin embargo, la desviación no es uniforme: el robo con violencia se encuentra relativamente próximo al patrón oficial, las lesiones presentan una diferencia moderada, mientras que el robo sin violencia y, especialmente, las amenazas muestran las discrepancias más importantes. El índice sintético se calcula mediante la media geométrica porque los componentes son razones y, por lo tanto, tienen una interpretación multiplicativa. A diferencia de la media aritmética, la media geométrica reduce la influencia desproporcionada de un único cociente muy elevado y representa mejor la distancia típica conjunta entre encuesta y registro. El resultado debe leerse como una medida de consistencia externa relativa y no como una corrección automática de las prevalencias ni como una estimación del error muestral.

La comparación con antecedentes locales permite dimensionar mejor este resultado. La EPC 2015 presenta un índice sintético de 1,41, aunque su comparación está limitada porque la pregunta incluía la victimización del entrevistado “o algún pariente” y las prevalencias por delito debieron reconstruirse a partir de respuestas múltiples. Además, se trató de un estudio realizado con una muestra representativa y los cuestionarios fueron administrados de manera presencial por encuestadores supervisados. En el extremo opuesto, ACUMARA 2020 alcanza un índice sintético de 3,04, con desviaciones elevadas y sistemáticas en robos, agresiones y amenazas. MDPET ocupa, por lo tanto, una posición intermedia: se distancia más del patrón ENV-SNIC que la EPC, pero considerablemente menos que ACUMARA.

El contraste indica que las prevalencias absolutas de EPS INHUS-MDPET 2026 deben interpretarse con cautela, especialmente para amenazas y robo sin violencia, porque su distancia respecto del SNIC es mayor que la observada en la ENV. Al mismo tiempo, la desviación no es homogénea entre categorías y la estructura relativa de los hechos denunciados muestra una correspondencia apreciable con los registros: robos y hurtos representan 64,1% de las respuestas denunciadas comparables en EPS INHUS-MDPET 2026 y 63,3% de los registros seleccionados del SNIC, mientras las amenazas representan respectivamente 13,6% y 13,4%. La evidencia externa sugiere, por lo tanto, distinguir entre la precisión de los niveles absolutos y la consistencia de la estructura interna. EPS INHUS-MDPET 2026 ofrece una base especialmente informativa para analizar composición, asociaciones, perfiles y diferencias territoriales, mientras que sus prevalencias absolutas se presentan como aproximaciones que requieren ponderación, análisis de sensibilidad y contraste con fuentes externas.

Aporte del estudio: alcances y limitaciones

Toda estrategia de producción de información implica decisiones metodológicas que amplían ciertas posibilidades de análisis y, al mismo tiempo, establecen límites para interpretar los resultados. La encuesta fue diseñada para obtener una base amplia, diversa y territorialmente extendida sobre un problema de fuerte relevancia social. Su principal aporte reside en la capacidad de integrar en un mismo instrumento experiencias de delito, percepción de inseguridad, prácticas de autoprotección, conflictividad barrial, confianza institucional y preferencias sobre respuestas públicas, y relacionarlas con características sociales y territoriales de las personas encuestadas.

Una primera limitación deriva del carácter declarativo y retrospectivo de las encuestas de victimización. Como se señaló, las respuestas pueden verse afectadas por el recuerdo, la interpretación y la clasificación de los acontecimientos. Estos problemas no invalidan el instrumento, pero obligan a entender sus resultados como experiencias declaradas y no como una reproducción directa del universo de hechos delictivos.

Una segunda limitación se relaciona con el carácter voluntario y no probabilístico del relevamiento. La composición obtenida es muy próxima a la población por sexo y presenta correspondencias razonables en varias unidades territoriales, pero también muestra una fuerte sobrerrepresentación de personas con educación superior y diferencias por edad y territorio. Las ponderaciones corrigen parte de estas diferencias observables, aunque no eliminan una posible autoselección temática ni otros mecanismos no medidos. Por eso, las prevalencias absolutas requieren mayor cautela que las comparaciones internas y los análisis de relación entre variables.

Una tercera consideración se refiere a la escala territorial. La encuesta proporciona información suficiente para analizar e interpretar las once zonas del partido e incorporar sistemáticamente el componente espacial a los modelos. Al mismo tiempo, las diferencias de tamaño entre áreas y la naturaleza no probabilística de la muestra aconsejan interpretar cada perfil como una comparación interna de este relevamiento y no como una tasa poblacional precisa de cada territorio. La combinación entre descriptivos ponderados y análisis bivariados y multivariados sin ponderar permite aprovechar la información de todas las zonas sin confundir sus distintos usos analíticos.

Finalmente, el relevamiento se realizó durante un período específico y describe las condiciones existentes en ese momento. Como ocurre con cualquier encuesta transversal, los resultados ofrecen una fotografía y no una serie temporal. Las comparaciones con estudios anteriores son útiles para contextualizar, pero las diferencias de diseño impiden tratarlas como una serie estrictamente comparable.

Estas limitaciones deben considerarse junto con las fortalezas del diseño. La amplitud de la base, la cobertura territorial alcanzada, la diversidad de temas incorporados en el cuestionario y la estabilidad de los principales resultados ante distintas decisiones de ponderación ofrecen una base sólida para describir patrones internos y explorar relaciones entre experiencias, percepciones y características sociales. El uso explícito de definiciones, ponderaciones y modelos diferenciados permite además hacer transparente el modo en que se construyeron los resultados.

La comparación con relevamientos anteriores permite ubicar esta encuesta (EPS MDPET-INHUS 2026) dentro de una tradición local de encuestas sobre seguridad, pero también muestra que esos antecedentes son metodológicamente heterogéneos. Las encuestas ICES/MDPET de 2012 y las encuestas de percepción ciudadana MDPET de 2015 y 2016 recurrieron a relevamientos presenciales domiciliarios con diseños territoriales probabilísticos o multietápicos y tamaños próximos a 1.200–1.400 casos. ACUMARA 2020 reunió 615 respuestas completas, aunque la documentación disponible no describe con igual precisión el procedimiento de selección ni el modo de administración. EPS INHUS-MDPET 2026 reúne 1.470 casos mediante una convocatoria online autoadministrada, voluntaria y con monitoreo territorial.

Cuadro A6. Comparación metodológica de relevamientos locales sobre seguridad

Estudio	N	Tipo de muestra/selección	Administración
ICES/MDPET 2012	1.197	Probabilística, estratificada y polietápica	Presencial domiciliaria
EPC MDPET 2015	1.426	Polietápica y estratificada en 7 zonas; selección aleatoria de radios y manzanas	Presencial domiciliaria
EPC MDPET 2016	1.407	Polietápica y estratificada en 7 zonas; radios y manzanas seleccionados aleatoriamente	Presencial domiciliaria
ACUMARA 2020	615	Procedimiento de selección insuficientemente documentado	Modo no precisado en la ficha disponible
EPS INHUS-MDPET 2026	1.470	Voluntaria no probabilística, con difusión multicanal y monitoreo territorial	Online autoadministrada

Nota: los tamaños corresponden a los casos informados por las respectivas fichas técnicas. Las diferencias de diseño, universo, redacción de las preguntas y administración impiden tratar estos relevamientos como una serie temporal estrictamente homogénea.

Fuente: elaboración propia sobre las fichas técnicas y documentos citados en el informe.

Socios Plenarios



Socios Adherentes





 www.mardelplataentretodos.org

 info@mardelplataentretodos.org

 [mdpentretodos](https://www.facebook.com/mdpentretodos)

 [mardelplataentretodos](https://www.instagram.com/mardelplataentretodos)

 [@mdpentretodos](https://twitter.com/mdpentretodos)

 [Mar del Plata Entre Todos](https://www.youtube.com/Mar del Plata Entre Todos)

 [Mar del Plata Entre Todos](https://www.linkedin.com/Mar del Plata Entre Todos)



Mar del Plata
entre todos
Monitoreo Ciudadano